

Batallas Rituales y Marchas de Protesta: Modos de Apropiarse del Espacio en el Departamento de La Paz¹

Alison Spedding

Introducción

El *tinku* o “batalla ritual” es casi un clisé de la etnografía andina, un clisé ensalzado en la película boliviana “Sayariy” (1996) que supuestamente trata del famoso *tinku* de Macha (en realidad, eliminado por gases lacrimógenos lanzados por la policía con el apoyo de autoridades locales que querían poner fin a esta “costumbre bárbara”; así, como suele ser el caso, prácticas tradicionales sólo adquieren valor artístico cuando están a punto de desaparecer). La ritualización de la violencia en Bolivia, sin embargo, es más que un pedazo de romanticismo antropológico. Tiene que ver con el hecho de que, mientras Bolivia, al igual que la mayoría de sus países vecinos, cayó bajo dictaduras militares entre los 1960s y los 1980s, estas fueron mucho menos represivas en términos del número de personas torturadas o ‘desaparecidas’ (comparar las experiencias de Chile o Argentina). Igualmente, en términos de ese otro clisé de la violencia latinoamericana, la guerrilla, las guerrillas bolivianas son más notables por la producción de mártires izquierdistas (Che Guevara, Néstor Paz Zamora²) que por provocar masacres de la población civil o enfrentamientos mayores con los militares. Aquí la compara-

1 Esta es una versión en castellano de un ensayo en inglés preparado para el congreso ‘Kay Pacha’ en Gales en 1998. Se dirige a un público internacional que no conoce Bolivia y, por lo tanto, incluye descripciones de algunas cosas que se darían por sentado entre un público boliviano, pero creo que es útil volver a mirar como desde fuera fenómenos sociales que, quizás por ser tan cercanos y frecuentes, no suelen ser analizados a fondo.

2 Che Guevara es demasiado conocido como para necesitar una introducción. Néstor Paz Zamora, cuyo hermano, Jaime Paz Zamora, llegó después a la Presidencia, era un ex-seminarista que murió en la guerrilla fracasada de Teoponte. Ver Suárez (1996: 292-3) para un ejemplo típico de hagiografía izquierdista contemporánea referente a él.

ción obvia es con el Perú, donde se puede interpretar los notorios excesos de Sendero Luminoso como una reacción a la institucionalización de la violencia y la discriminación, no sólo por parte del Estado peruano sino también como elemento fundamental del complejo de dominio agrario conocido como “gamonalismo”.³

Una comparación más lejana puede establecerse con Colombia, donde (como también ha ocurrido en el Perú) cocales han sido fumigados a la fuerza con agroquímicos⁴ y los asesinatos son el pan de cada día en el contexto del narcotráfico (y otros ambientes políticos, tanto oficialistas como insurgentes o delincuenciales), mientras las autoridades bolivianas, no obstante haber mantenido su “certificación” por parte de los EE.UU., no se han atrevido a proceder con más que la erradicación manual de cocales (que no trae los peligros considerables para la salud y el medio ambiente que implica el uso de agroquímicos destructivos en gran escala) y los conflictos entre narcotraficantes raras veces van más allá que el “voltear” mercancía ajena o llevarla al fiado sin pagar posteriormente y denunciar los rivales a la policía como modo de evitar el pago de deudas o eliminar la competencia. No quiero negar que hay muertes en el curso de los “conflictos sociales” ocasionados por la política oficial frente a la producción de coca y otros temas (este ensayo va a mencionar algunas de estas muertes), pero los enfrentamientos entre el pueblo y el Estado en Bolivia generalmente se desarrollan dentro de las ‘reglas del juego’, es decir, guiados por una ritualización que es tácitamente reconocida por ambas partes y cuando hay heridos o muertos en el curso de estos enfrentamientos, su impacto es enorme en relación con la incidencia estadística de tales acontecimientos, si se los compara con lo que ocurre en los países vecinos.

Otro aspecto de estos ‘conflictos sociales’ que intentaré comentar es la apropiación de espacio: los lugares donde tales conflictos ocurren una y otra vez, al igual que el *tinku* en la plaza de la reducción colonial de Macha, y la utilización de tácticas como bloqueos de caminos cuyo fin no es directamente violento sino obtener la satisfacción de demandas mediante el impedimento del tránsito libre en el espacio hasta que se logre una solución. Lo opuesto al bloqueo de caminos es la marcha de protesta, con distancias que varían entre unas cuadradas urbanas hasta cientos de kilómetros rurales, una táctica que se destacó (aunque no era la primera vez que había sido utilizada) a partir de la “Marcha por el Territorio y la Dignidad”, desde las tierras bajas de Oriente hasta la ciudad de La Paz, en 1990.

3 Véase Degregori (comp.)(1994) para una compilación equilibrada sobre los éxitos iniciales de Sendero y las razones para su eventual derrota. Gose (1994) incluye unas observaciones interesantes sobre el complejo de dominio violento y extra-legal denominado ‘gamonalismo’ y considera que Sendero es una de las transformaciones más recientes de lo mismo.

4 Véase Tocancipa (s.f.) para algunos datos sobre la erradicación de coca en Colombia.

1. Conflictos fijos. Los *tinku* de hoy: estudiantes y profesores versus policías

La Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, no ocupa un campus centralizado sino se distribuye en varias localidades del centro urbano y los suburbios del sur. El centro de protesta política es el Monoblock, un edificio de doce pisos en el término sur de la avenida central conocida como “El Prado”, donde se ubican las facultades de Humanidades, Ciencias Económicas, la tradicionalmente radical de Ciencias Sociales y las autoridades universitarias. Hasta 1994, el Monoblock se abría directamente sobre la ruta principal a la zona sur donde vive la mayoría de la clase media alta, algo que facilitaba bloqueos de calles y otras protestas. La entonces Alcaldesa de La Paz, Mónica Medina, ordenó la construcción de una carretera hundida con un puente de una sola vía que la cruce, conocida como el “Nudo Villazón”, delante de la universidad. Inicialmente, se sospechaba que era una movida para impedir las actividades mencionadas pero, una vez terminada (se decía que los arquitectos eran ex-alumnos de la UMSA), resultó obvio que la nueva estructura más bien facilita los bloqueos de caminos. En vez de tener que desplegarse sobre una calle ancha, de doble vía, ahora los estudiantes sólo necesitan bloquear el puente, para lo cual bastan unas veinte personas determinadas (generalmente enmascaradas con pañuelos para impedir su identificación por parte de la policía). De allí pueden tirar piedras⁵ a cualquier vehículo cuyo chofer sea lo bastante aventurado como para intentar pasar, sin necesidad de ocupar la calle misma.

Las protestas universitarias eran un acontecimiento anual en La Paz, generalmente en febrero o marzo, cuando el personal administrativo y docente, apoyado por estudiantes, salía a marchar por el Prado exigiendo que el gobierno apruebe un aumento en el presupuesto para el nuevo año académico.⁶ En 1995, la Reforma Educativa (referente al calendario académico y las calificaciones del personal docente, ejecutado en parte, y evaluación estudiantil, sin efecto hasta la fecha, más cambios en el pensum, ejecutados en parte a partir de 1998) provocó protestas masivas en la primavera (septiembre – octubre). Dado que las marchas no solían conseguir el consentimiento oficial al nuevo presupuesto, eran seguidas por una huelga de

5 Aunque también figura como una táctica clásica de revueltas urbanas en Europa, al menos hasta que el asfalto reemplazó a los adoquines, tirar piedras es una técnica clásica de los levantamientos campesinos en los Andes. Por lo general, las mujeres recogen y traen piedras y los hombres las tiran. Se roda piedras grandes desde lo alto de peñas o barrancos y se tira piedras pequeñas con la mano o con hondas y flechas. Los profesores rurales suelen ser expertos en el manejo de hondas (cuyo uso pacífico se realiza para controlar el rebaño de ovejas, en vez del perro ovejero que se acostumbra en Europa) mientras algunos universitarios utilizan flechas. Hoy en día, las calles alrededor de la UMSA son asfaltadas y algunos de los que protestan tienen que ocuparse en traer el abastecimiento de piedras.

6 Supuestamente, el año académico universitario debe ser concurrente con el año calendario. Retrasos debido a huelgas y otros problemas implicaban que el año académico empezaba muchas veces con seis meses o más de retraso (p.e., “1993” podía empezar en julio o agosto de ese año). A partir de 1996, la Reforma Educativa intentó remediar esta situación, pero en 1992, por ejemplo, las protestas sobre el presupuesto de ese mismo año tuvieron lugar en marzo de 1992 mientras la mayoría de las carreras estaban todavía en la gestión 1991.

duración variable (marzo – abril) hasta que se concedía el aumento. En la protesta contra la Reforma, las autoridades universitarias eligieron no una huelga sino la “movilización” –protestas mientras seguían con las clases. Docentes (en orden de antigüedad) y estudiantes (en orden de gusto o radicalismo) iniciaron una huelga de hambre⁷ y se declararon protestas diarias.

Estas protestas ocurren en horarios fijos: primero, entre 12:00 y 13:30, cuando toda La Paz sale de sus lugares de trabajo para volver a casa al tradicional almuerzo en familia (en parte porque, debido a la altura, no se puede digerir una comida principal más tarde); y luego entre 18:30 y 20:00, cuando la gente sale de sus trabajos para ir a descansar. Fuera de estos horarios, la actividad es normal. Cuando llegaban los horarios de protesta, estudiantes radicales bloqueaban el puente y tiraban piedras; la policía se reunía en la Plaza del Estudiante, a media cuadra del Monoblock y, después de un rato, bajaba a desalojarles con gases.

Uno de esos días, yo tenía una clase entre 17:30 y 19:00, que se desarrollaba normalmente. Luego crucé al otro lado del piso 8 del Monoblock y esperé a los alumnos de la clase siguiente, de 19:00 a 20:30. Dos o tres se presentaron y dijeron que los demás tenían una clase en otro edificio, más abajo del puente, y probablemente no iban a llegar debido a la “trifulca” que ya estaba en plena acción. Decidimos esperar hasta 19:30 y, si no había más gente, suspender la clase. Para ese entonces, el conflicto se había intensificado y el gas empezaba a llegar. Por convención, la policía sólo suele gasificar la parte exterior de la universidad, pero esa vez lograron echar granadas de gases lacrimógenos por la puerta principal a la planta baja del Monoblock. Intentamos bajar para refugiarnos en el Centro de Estudiantes de Sociología en el tercer piso, sólo para encontrar una ola intensa de gases; corrimos hacia arriba, pero el gas nos alcanzó en el décimo piso. Los métodos establecidos de fumar cigarrillos⁸ y prender

7 Huelgas de hambre son otro método que no puede faltar en las protestas bolivianas, desde que una huelga famosa condujo a la dimisión del entonces dictador Hugo Banzer, en 1978. Sólo unos pocos son bastante serios como para asumir una “huelga de hambre dura” tomando sólo agua; la mayoría se mantiene en base a dulces y mates con azúcar o miel, a la vez que masca coca y se retira de la huelga en tanto muestra alguna consecuencia física del ayuno, como presión elevada. Cuando se enfrenta con huelguistas serios, muchas veces el gobierno interviene en tanto se convence de que ellos van a seguir, sin importar las consecuencias para su salud y los interna a la fuerza en una clínica donde están obligados a romper el ayuno. En la mayoría de los casos, se resuelve el problema por negociación y concesiones mutuas y la huelga se levanta en unos diez o quince días. A diferencia de los militantes de la IRA, ningún huelguista boliviano ha muerto de hambre; a la vez, ningún gobernante boliviano se aferra a sus principios tanto como Margaret Thatcher.

8 Sospecho que este uso del tabaco tiene más que ver con el uso ritual del tabaco como una barrera contra ciertos tipos de contaminación ritual, como la brujería y la contaminación de la muerte (véase Spedding 1996a referente a la contaminación de la muerte) que con los aspectos químicos del gas lacrimógeno. Cuando se utiliza gases contra manifestaciones en La Paz, las comerciantes callejeras y otros presentes siempre prenden cigarrillos. La costumbre de prender pequeñas fogatas con papeles sueltos y cualquier otra cosa que haya a mano cuando se gasifica la universidad, quizás tenga algo que ver con el uso de fogatas como señal de rebelión. Digo esto porque personalmente no he notado que estas medidas tengan un impacto significativo en aliviar las molestias causadas por el gas.

fuego (las clases son gasificadas desde afuera con regularidad y los estudiantes prenden fuego a hojas sueltas de sus carpetas) resultaban insuficientes, no obstante el hecho de que algunos estudiantes estaban intentando quemar sillas y bancos. Varias personas, yo entre ellas, estaban desmayadas en el piso mientras otras rascaban desesperadamente las paredes y puertas cerradas. Fuimos salvados luego por la secretaria de la Carrera de Psicología, que se había quedado a cuidar la oficina. Nos abrió la puerta y nos admitió. Pudimos entonces colgarnos en el alfeizar de la ventana abierta como pescados moribundos hasta que, después de casi una hora, nos rescató el encargado del ascensor, provisto de una máscara anti-gas. Cuando menos un docente que “no tiene pinta de docente” (por ser joven y moreno) y salió del edificio al terminar su clase a las 19:00, fue arrestado y pasó una semana en las celdas de la PTJ, acusado de “destruir la propiedad privada” (romper parabrisas de vehículos que intentaban pasar el bloqueo) e “incitar al disturbio” antes de ser puesto en libertad. Los días siguientes, afiches escritos a mano aparecieron en las paredes, aconsejando que, en caso de otros ataques similares, se utilicen pañuelos mojados con vinagre (en realidad, se suele utilizar orín que es más fácil de conseguir en el momento preciso) para tapan la boca, se unte bicarbonato de sodio alrededor de los ojos y NO se corra hacia arriba porque los gases siempre suben.

El aspecto excepcional de este caso es que la policía gasificó dentro del edificio mismo, rompiendo así una de las “reglas del juego” –sólo gasificar afuera, al aire libre, donde los efectos del gas no son tan graves. Aparte de esto, el conflicto era normal. Durante esas protestas, se observaba a los policías parados en la Plaza del Estudiante chequeando sus relojes, mientras esperaban la hora establecida en la cual iban a bajar a enfrentarse con los estudiantes. Alguien que no quiere ver o participar en este rito sólo tiene que evitar el lugar en cuestión durante los horarios conocidos, aunque esto no es del todo fácil porque a veces no hay rutas alternativas y, dado que muchos de los estudiantes y docentes tienen empleos extra-universitarios, 12:00-13:30 y, sobre todo, 19:00-20:30 son las horas pico para clases.

Aunque el impacto de las reformas del Estado y la debilitación del movimiento obrero afectaron el proceso en 1997 y 1998, hasta entonces marzo y abril eran temporada de manifestaciones en La Paz. Es notable que, en 2000, la ola de protestas populares impulsada por el problema del agua en Cochabamba haya seguido el mismo calendario. La COB presentaba un pliego petitorio sobre incrementos de sueldos y otros y, cuando el gobierno no consentía, declaraba una huelga general indefinida por costumbre en marzo de cada año. En realidad, por los años 1980s, la ‘huelga general’ ya se había convertido en una huelga educativa. Hoy, sin embargo, la mayoría de los bolivianos trabaja por cuenta propia y entonces no puede entrar en huelga aunque quiera; los trabajadores de las empresas privadas serían despedidos en caso de atreverse a entrar en huelga y, después de 1985, lo mismo ocurre con la mayoría de los funcionarios públicos.⁹ Sólo los trabajadores en salud pública siguen haciendo huelga

9 Durante el gobierno de la UDP (1982-85), los funcionarios públicos hacían huelgas, pero el gobierno del MNR

(sus calificaciones especializadas les protegen del despido) pero, debido a la naturaleza de su trabajo, no pueden hacer más que huelgas de un día o limitar sus servicios a la atención de emergencias. Entonces, los únicos que acatan la huelga suelen ser los trabajadores del sistema de educación fiscal.¹⁰ Las escuelas fiscales se cierran y los profesores salen a las calles.

No es casual que esta huelga generalmente ocurra a partir de marzo y siga durante abril, que es el mes de la cosecha principal en las regiones andinas de Bolivia. Mientras los padres de familia urbanos se quejan, los rurales se alegran porque aprovechan de mandar a sus hijos a la chacra o al pastoreo mientras ellos escarban papas, recogen maíz o cosechan café. Los profesores rurales, en La Paz, casi todos hijos de campesinos y a veces campesinos a tiempo parcial ellos mismos, se van a la ciudad para utilizar hondas y otras tácticas tradicionales de resistencia en los enfrentamientos con la policía. Otra vez, estos conflictos se desarrollan según reglas implícitas: las manifestaciones que van por el Prado no utilizan piedras para romper las vidrieras de las tiendas o los rascacielos modernos cubiertos de vidrio reluciente, pero sí las tiran en enfrentamientos callejeros en espacios más ‘populares’ como el Cementerio o la Garita de Lima, donde las construcciones son tales que no ofrecen muchos vidrios para ser rotos. La Plaza Murillo, donde se ubican los edificios del Parlamento y el Palacio Presidencial, siempre tiene un cordón fuerte de policías y no se permite la entrada de manifestaciones excepto cuando son estrictamente pacíficas y/o no representan una oposición al oficialismo.

Por lo general, no se requiere que los comerciantes “ambulantes” (así llamados aunque la mayoría son más bien ‘sentantes’) se retiren o participen en manifestaciones callejeras¹¹ excepto en ciertas circunstancias. Un ejemplo fueron los motines populares del 9 de abril de 1996, ostensiblemente provocados por la privatización del ferrocarril nacionalizado a través de su venta a unos capitalistas chilenos, aunque es relevante que 9 de abril es el aniversario de la “revolución nacional” de 1952, cuyas reformas (entre ellas, la nacionalización) estaban

que entró en 1985 con una plataforma neoliberal despidió inmediatamente a los primeros funcionarios que iniciaron una huelga en su gestión, después de lo cual ellos se han comportado al igual que los empleados privados.

- 10 Formalmente, los docentes del sistema fiscal también son funcionarios del Estado, pero gozan de ‘autonomía’, lo que incluye la mantención del derecho a la huelga. A veces, el gobierno intenta multar a los docentes del ciclo básico, intermedio y medio u obligarlos a trabajar días extras para reemplazar los perdidos debido a la huelga, pero siempre paga a los docentes universitarios por el tiempo no trabajado. Creo que esto ocurre porque los docentes universitarios son miembros de la misma fracción de clase que los parlamentarios (cuando no parlamentarios o familiares, co-militantes etc. de parlamentarios ellos mismos), por lo tanto, la solidaridad de clase les asegura sus cheques mensuales, con o sin huelga.
- 11 Comerciantes y artesanos están organizados en gremios y participan en sus propias marchas de protesta contra los impuestos, reglamentos municipales y otros asuntos que les afectan directamente. Estas marchas suelen ser pacíficas y raras veces desembocan en enfrentamientos con la policía, aunque cuando son masivas obstaculizan el tráfico vehicular.

siendo en gran parte desbaratadas con la colaboración del mismo partido, el MNR, que las realizó. Los amotinados obligaron a las vendedoras a recoger sus puestos y cerrar las tiendas si no querían ser saqueadas. En los últimos años, los saqueos tampoco han sido parte regular de los disturbios¹² (ya no ocurren casos parecidos a los motines de Brixton en Londres, por ejemplo, donde el blanco principal de los amotinados fueron las tiendas de electrodomésticos). En esta ocasión, se saquearon algunas tiendas de productos de panificación industrial (a diferencia de la artesanal, que sigue proveyendo el pan de batalla en La Paz), cerca del Mercado Rodríguez. Los saqueadores eran, o al menos aparentaban ser, pobres y los que les vieron aprobaron su acción diciendo que eran pobres y querían pan. No se saquearon tiendas de objetos de lujo, como suele ocurrir, cuando hay motines, en las ciudades del Primer Mundo.

Después de vandalizar los trenes vendidos a los chilenos, los blancos preferidos de los amotinados (en ésta y otras revueltas) fueron las comisarías. Se prendió fuego a unas tres, quemando todo su contenido, incluyendo muebles, archivos y bienes decomisados si los había y la muchedumbre soltó a los detenidos que allí se encontraban, mientras los policías huyeron. Algunas de estas comisarías (por ejemplo, la del Puente Topater) habían sido atacadas de manera parecida en ocasiones anteriores y después de este asalto dos de ellas no han vuelto a ser ocupadas por la policía. Cuando se captura a policías en estas situaciones, se suele despojarles de sus uniformes y humillarlos, pero sólo son linchados (a veces con violencia extrema) si se sabe que han sido excepcionalmente abusivos.

Estos momentos de efervescencia son breves y no suelen durar más de una tarde y/o noche. Puede haber cierto “desborde” en términos de aprovechar del disturbio para asaltar las casas de enemigos personales u otros blancos en beneficio individual, pero esto no es generalizado. Se observó la misma pauta en los acontecimientos ocurridos un domingo en Achachachi, en abril de 2000: se asaltó la comisaría de policía y se quemó su contenido, se liberó a los detenidos de la cárcel y se linchó no a un soldado común sino a un capitán que comandaba la tropa, es de suponer en venganza por el hecho de que esa tropa disparó antes con municiones vivas y causó la muerte de dos personas. Todo esto ocurrió en el espacio de pocas horas, entre aproximadamente las 11:00 de la mañana y media tarde.

12 Durante el gobierno de la UDP, cuando la hiperinflación desestabilizó la economía, parece que saqueos de tiendas no sólo de abarrotes sino de otros artículos de consumo (por ejemplo, de zapatos; se cuenta cómo los saqueadores correteaban tratando de encontrar los pares de los zapatos sueltos que habían alzado al azar) eran bastante frecuentes, pero en tanto la economía se normalizó han dejado de ocurrir.

2. Marchas campesinas: (re)apropiación de rutas

Marchas de productores de coca

Aquí no he de tratar la ‘Marcha por el Territorio y la Dignidad’ de 1990, que partió del Beni, pasó por Caranavi y Nor Yungas hasta llegar a la ciudad de La Paz, pero cuyos integrantes eran mayormente habitantes de las tierras bajas de Oriente y miembros de grupos étnicos minoritarios, que tienen problemas particulares con la extracción de madera, la ganadería extensiva y la ocupación de sus territorios por parte de diversos intrusos. Sólo diré que su gran impacto publicitario (en buena parte debido a que supuestamente representaba un nuevo estilo de protesta conciliatoria en vez del estilo revoltoso tirapiédras de las alturas; cfr. Ticona, Albó y Rojas 1995) puso de moda las marchas de larga distancia en los años siguientes.

La primera marcha grande de cocaleros ocurrió en diciembre de 1993. Empezó el 7 de diciembre en La Asunta, la zona de colonización de Sud Yungas/Caranavi y una zona “en transición” o de “coca excedentaria” (según el vocabulario oficial que uno prefiera).¹³ Aunque el gobierno sólo admitió públicamente la existencia de coca “excedentaria” en los Yungas hacia fines de 1996, bajo presión estadounidense, la gente de Asunta ya sabía que sus cocales eran formalmente ilegales y encabezó los movimientos de protesta en Sud Yungas. Algunos dirigentes campesinos de la “zona tradicional” (que se extiende desde Suri, en Inquisivi, pasando por Irupana, Chulumani y Coripata hasta Coroico, en Nor Yungas) consideran que ellos no deben colaborar con las zonas excedentarias o al menos no con el Chapare, pero la mayoría de las bases y dirigentes parece pensar “El Chapare hoy, Asunta mañana y nosotros pasado mañana”, de modo que participa en protestas solidarias.

13 Las disposiciones oficiales reconocen unas 12.000 has. de cultivos “legales” de coca en Bolivia, mayormente en las provincias de Sud Yungas, Nor Yungas e Inquisivi en La Paz y algunos otros lugares como Vandiola (en la actualidad, casi abandonado para el cultivo de coca) en Cochabamba. Estos son considerados “zonas tradicionales” y se supone que cubren la demanda legal de coca (para masticación, usos medicinales y rituales, la todavía incipiente industrialización, etc.). Cualquier otro lugar de Bolivia donde se cultive coca, sea Asunta, el Chapare o Santa Cruz, es clasificado como un sitio de producción “excedentaria”. “Excedentaria” no quiere decir, en el sentido normal de la palabra, producción en exceso en relación a la demanda que no puede ser vendida, sino producción supuestamente destinada a satisfacer la demanda del narcotráfico; por lo tanto, estas zonas deben convertirse en zonas “en transición” –a la producción de otros cultivos. Tales zonas, entonces, son el objeto de diversos programas de erradicación voluntaria o forzosa, mientras la zona tradicional queda exenta de esto (aunque en realidad, a principios de los noventa, se realizó algo de erradicación voluntaria, a cambio de una compensación en dinero, en la zona tradicional). Véase Sanabria (1993: 174-184) para algunos comentarios sobre la erradicación de coca en el Chapare.

La marcha avanzó hacia el sur por la carretera troncal, adquiriendo más participantes en cada comunidad por donde pasaba. ADEPCOCA¹⁴ ordenó a sus afiliados participar en la marcha; si no iban personalmente o mandaban a un miembro de su familia u otro reemplazante, no se les iba a renovar su carné de productor. Cuando la marcha se acercaba a La Cumbre (el punto más alto donde la carretera cruza la Cordillera Oriental, antes de bajar a la ciudad) el gobierno mandó a la policía, que se retiró al ser retada por las mujeres que encabezaban la marcha, y luego al ejército, que logró parar a los marchistas en el camino, aunque sin violencia. Representantes del gobierno fueron a negociar con los marchistas y se llegó a un acuerdo: se permitiría que la marcha avance hasta La Cumbre a cambio de firmar un documento comprometiéndose a no avanzar más (es decir, podían ir a La Paz pero ya no como marcha organizada) y aceptando algunas concesiones oficiales respecto a los caminos en los Yungas (la maquinaria del Servicio Nacional de Caminos iba a quedar en los Yungas, mejoramiento de caminos), reconocimiento de ADEPCOCA como representante legítima de los productores de coca y la promesa de que el gobierno '*no intentará llevar a cabo medidas de militarización y erradicación forzosa, sobre todo en las regiones tradicionales*'.¹⁵ El acuerdo fue firmado el 14 de diciembre. La tropa se retiró entonces para permitir a los marchistas seguir hasta La Cumbre, donde realizaron una wilancha (sacrificio con sangre, en este caso de una llama) antes de dispersarse para ir a La Paz o volver a los Yungas, según lo querían.

Para comprender estos acontecimientos, es necesario comentar la condición de los caminos en los Yungas y su relación con La Cumbre Achachila, el espíritu terrestre de La Cumbre. Las carreteras troncales en los Yungas son de tierra y de una sola vía, con algunos lugares más anchos donde los vehículos pueden cruzarse. La mayoría pasan por laderas abruptas y con frecuencia encima de barrancos con caídas de cincuenta o cien metros. Vuelques de movilidades ocurren casi cada semana y generalmente con un saldo de varios muertos; cuando una flota se vuelca o la caída es muy alta, treinta o más personas pueden morir en un solo accidente (cuando un camión se vuelca, hay menos muertos porque los pasajeros que no logran saltar son echados automáticamente, pero dentro de una flota hay poca esperanza). Aparte de medidas como escoger una movilidad con chofer experimentado y chequear que no esté borracho, la única protección conocida contra los vuelcos es echar una libación de alcohol puro (la bebida preferida de los espíritus terrestres) a La Cumbre Achachila cada vez que uno pasa por allí. Casi todos los choferes llevan una botellita de alcohol al lado del volante para este fin y los pasajeros también cumplen con este rito. Los dueños de movilidades pueden realizar ritos más elaborados con yatiris en el cerro encima de la ruta, señalado por una cruz al lado oriental

14 Asociación Departamental de Productores de Coca: una organización campesina que proporciona carnés de productor a los productores que se registran voluntariamente con ellos (y pagan por la afiliación; en 1997, 300 Bs. para afiliados nuevos). Con estos fondos, compró el Mercado Legal de la Coca en Villa Fatima, donde se vende coca a los mayoristas de La Paz y el interior del país. ADEPCOCA actúa como portavoz de los cocaleros de los Yungas y colabora muy de cerca con la Federación Campesina.

15 Véase Presencia 14.12.93 para los doce puntos del acuerdo completo.

y una estatua de Cristo (que algunos denominan 'el Yungueño Congelado') al lado occidental. Este sitio de culto es tan requerido que en agosto, el mes principal de ofrendas a los espíritus terrestres, algunos yatiris establecen carpas allí para ofrecer una atención permanente. El sacrificio de una llama en La Cumbre, entonces, representaba una medida de seguridad vital a la vez que una celebración del resultado relativamente exitoso de la marcha.

El otro problema crónico del tránsito yungueño corresponde a los derrumbes, que pueden ocurrir cualquier rato pero son muy frecuentes durante la temporada de lluvias, sobre todo en febrero y marzo. Se exigía la presencia permanente de la maquinaria del SNC en los Yungas de modo que esté disponible para limpiar derrumbes, así todos los derrumbes aparte de los más serios (cuando se va la plataforma, es decir, se lleva el camino entero en vez de simplemente tapanlo con tierra y piedras) serían limpiados en unas horas. Antes, los pasajeros tenían que pasar días y noches acampando en el camino, esperando la llegada del tractor, o pasar por rutas alternativas, lo que a veces implicaba dar la vuelta a provincias enteras. Esta maquinaria ha sido quizás el resultado más práctico de esta marcha, que tenía mucho que ver con mejorar las condiciones de tránsito en la ruta por donde marchaba, a la vez que expresaba demandas específicas referentes a la producción de coca.

La marcha siguiente, en septiembre de 1994, fue parte de una protesta combinada originada en el Chapare, donde se realizaba y se realiza la erradicación forzosa de cocales. El gobierno había detenido a un número elevado (varios centenares) de gente sin documentos de identidad, considerada como 'población flotante' y, como tal, vinculada de alguna manera con el narcotráfico. En realidad, la 'población flotante' en las zonas cocaleras se compone mayormente de migrantes estacionales en busca de trabajo agrícola, provenientes de otras regiones cocaleras o de las alturas; muchas veces no se preocupan de portar sus carnés de identidad, en caso de poseerlos (no es raro que habitantes rurales no los tengan). Es decir, no había razones válidas para creer que esta gente realmente tenía algo que ver con el narcotráfico. Una marcha salió de Villa Tunari por la carretera troncal del Chapare y fue gasificada desde helicópteros; los marchistas se quejaron de que, aparte de los acostumbrados gases lacrimógenos, había otros gases de colores raros que provocaban vómitos y diarrea. Decidieron que la carretera era demasiado abierta y pasaron a los viejos caminos de herradura y sendas de a pie, primero por el monte y luego por los caminos de herradura, antiguas rutas de arrieros que cruzan la cordillera.

La marcha en los Yungas empezó el 6 de septiembre de 1994. Siguió por la carretera hasta el pueblo viejo de Unduavi (más abajo del puesto de control policial del mismo nombre, que es hasta donde alcanza la carretera asfaltada) y luego por caminos de a pie a través de la cordillera, para salir sorpresivamente justo encima del barrio periférico de Pampahasi (encima de la ciudad, hacia el noreste) y no en Villa Fátima (barrio norteño por donde la carretera a Yungas entra a la ciudad). El ejército no había pensado en esta ruta alternativa y no se dió

cuenta de la presencia de los marchistas hasta que empezaron a bajar hacia el centro por el barrio de Villa San Antonio. Mandó entonces tropa a Villa Copacabana a enfrentar a los marchistas en Villa San Antonio Bajo, gasificando de manera indiscriminada tanto a marchistas como a residentes del barrio, golpeando y deteniendo a varias personas hasta que lograron dispersar la marcha (12 de septiembre). Al día siguiente, la policía invadió el Mercado Legal de la Coca y arrestó a todas las personas que encontraron allí, entre productores comunes que vendían su coca, dirigentes de ADEPCOCA y hasta mujeres vendiendo comida. La mayoría fue puesta en libertad excepto aquellos que estaban en posesión de credenciales que evidenciaban que eran dirigentes de ADEPCOCA o de la Federación Campesina.

Mientras tanto, los marchistas del Chapare cruzaron la provincia de Ayopaya (Cochabamba) y entraron a la de Inquisivi (La Paz), utilizando los caminos de herradura que hasta hoy se emplean para conducir ganado en pie desde los valles a los Yungas y que fueron utilizados en el siglo XVIII por los vecinos urbanos de Sud Yungas que huían en masa de las huestes de Tupaj Katari. A principios del siglo XIX, estas rutas eran utilizadas por los guerrilleros de la Independencia. Los marchistas pasaron por Circuata en Inquisivi y de allí hasta el río de La Paz. Luego tomaron una ruta más directa siguiendo el río hacia Río Abajo, en vez de tomar la ruta más larga, por Chulumani e Irupana, siguiendo la carretera troncal. Ingresaron a La Paz por los barrios acomodados del sur, dos días después de la llegada de los yungueños. La represión de la marcha yungueña y la intervención al Mercado de la Coca habían provocado mucha crítica hacia el gobierno por sus tácticas torpes (una opinión difundida fue “Parece un gobierno de facto [una dictadura], no un gobierno democrático”), de modo que se permitió a los chapareños marchar en buen orden por todo el centro de la ciudad, pasar delante de la universidad y subir por el Prado, entre filas de habitantes urbanos que les aplaudían y regalaban pan y gaseosas. La marcha fue encabezada por una mujer joven con una wiphala (bandera de cuadros multicolores) que había llevado desde Cochabamba delante de la marcha¹⁶ y no mucho detrás de ella venía un ataúd, representando a un marchista que murió dos días antes cuando una piedra cayó en su cabeza en un sendero montañoso. Se le representó como un mártir de la causa, lo mismo que si hubiera sido baleado por los soldados. Los chapareños eran seguidos por masas de campesinos paceños que se habían juntado a la marcha al pasar por sus comunidades en el valle y en la cola apareció el contingente yungueño (o lo que

16 La mujer que encabeza la marcha con una bandera es un ejemplo de uno de esos símbolos cuyo origen es difícil identificar (aunque quizás esto sólo muestra lo vano del intento de clasificar elementos de la cultura boliviana como ‘andinos’ o ‘hispanicos’). Harris (1980) tiene una foto de una muchacha con una bandera blanca conduciendo guerreros Laymi a una batalla ritual. ¿Es esta una tradición ‘andina’ o será que deriva últimamente de la tradición artística europea que dio lugar, por ejemplo, al cuadro ‘La Libertad encabezando al pueblo’, de Eugene Delacroix? Dado que los tejidos Laymi han incorporado iconografía neoclásica que era popular a principios del siglo XIX (un motivo derivado de la rama de olivo es uno de los diseños que distinguen los tejidos Laymi de los de sus vecinos), quizás no esté por demás pensar que también adquirieron la figura de la mujer con bandera para encabezar a sus guerreros.

quedaba de él) portando pancartas que aludían una disputa de entonces entre facciones rivales en ADEPCOCA, totalmente incomprensibles para (e ignorados por) los habitantes urbanos. Esta marcha, en suma, fue un espectáculo impresionante y una victoria propagandística, pero no condujo a acuerdos entre productores y gobierno aparte de las promesas acostumbradas de no ser demasiado abusivo y proveer el mentado ‘desarrollo alternativo’ a cambio de la erradicación.

La tercera marcha, también una protesta conjunta entre Chapare y Yungas y otra vez originada en el Chapare, fue una marcha de mujeres a principios de 1996. Las mujeres del Chapare siguieron casi la misma ruta hasta el Río de La Paz, mientras las mujeres yungueñas iban desde Asunta hasta Irupana, donde se juntaron con las chapareñas para tomar la carretera nueva hasta Lambate, la sección de altura de Sud Yungas, de donde llegaron hasta La Paz. Las portavoces aquí eran las chapareñas. Presentaron una plataforma de derechos humanos, exigiendo que los “Leopardos” (policías anti-narcóticos militarizados) dejen de robar (lo que hacen siempre), golpear (lo que hacen con frecuencia) y violar (lo que hacen de vez en cuando) a las personas cuando buscan drogas o precursores, a la vez que protestaron en contra de la erradicación de coca. Pero insistieron en hablar no con los funcionarios varones de costumbre sino con las Primeras Damas (esposas del Presidente y del Vice-presidente). Las Primeras Damas las invitaron a una especie de cruce entre una conferencia de prensa y una reunión de té, pero rehusaron en absoluto a comprometerse en algo. Las mujeres tomaron entonces la última medida de una huelga de hambre inconclusa que eventualmente fue levantada sin haber logrado concesiones significativas.

Para su mala suerte, esta marcha coincidió con la revelación de que el movimiento peruano MRTA (que luego iba a lograr fama mundial con la toma de la residencia del embajador japonés en Lima) había dirigido el secuestro del empresario boliviano Samuel Doria Medina y que algunos dirigentes de la COB y otras personas vinculadas con el Mercado Legal de la Coca estaban involucrados en el mismo. Al parecer, el gobierno amenazó a dirigentes obreros y cocaleros con imponer cargos judiciales relacionados con el secuestro si ellos apoyaban a las mujeres cocaleras. También parece que las cocaleras imaginaban que las Primeras Damas poseían la misma autonomía relativa y capacidad de tomar decisiones aparte de sus maridos que ellas mismas tenían, sin percibir el nivel de subordinación patriarcal al cual las esposas de políticos superiores están sujetas, no obstante su status social aparentemente muy superior al de las campesinas (una situación que no es exclusiva de Bolivia, basta observar la carrera política de Hillary Clinton).

La ‘movilización’ en contra de la Ley del Instituto de la Reforma Agraria (INRA) en 1996

Hasta la fecha, se considera que la Ley de Reforma Agraria de 1953 es la piedra fundamental de la liberación campesina en Bolivia. A la vez, hay dudas constantes sobre si el

gobierno va a mantener los derechos campesinos a la tierra o si más bien va a intentar instalar un régimen de propiedad de la tierra que favorezca a terratenientes grandes, supuestamente más modernos, productivos, tecnologizados y orientados al mercado. El borrador de la Ley INRA de 1996, propuesto como una reforma a la ley de 1953, fue preparado en consulta con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), aunque al parecer los dirigentes nacionales de los campesinos tenían un asesoramiento pésimo en el asunto. Se preparó una versión 'de consenso' del proyecto de ley, supuestamente más favorable a los campesinos, pero a último momento el gobierno la reemplazó por otra versión que, aunque reconoce algunos derechos campesinos (mayormente desde una perspectiva paternalista e ideal y de manera poco aplicable en la práctica; véase Llanos y Spedding 1999:73-76) los deja en última instancia definitivamente sujetos a los intereses de los terratenientes grandes y los representantes del agribusiness. Los representantes campesinos son sólo 3 de los 8 que conforman la directiva del Instituto de Reforma Agraria; los demás son representantes del gobierno, que se supone es anti-campesino por definición no obstante el color político que tenga, más representantes de la empresa privada.

Ambas versiones incluyen provisiones inaplicables que sólo van a empeorar una situación ya caótica respecto a la tenencia de la tierra en las comunidades campesinas. Por ejemplo, si la propiedad está por debajo del límite definido de la 'pequeña propiedad' en la región en cuestión (otra confusión, ya que los límites provienen de la ley de 1953 donde aparecen más bien como límites superiores, encima de los cuales la propiedad es 'mediana propiedad' o 'latifundio' y sujeto a otro régimen legal), unas 10 has. excepto en regiones muy estériles, no puede ser repartida en herencia sino que debe ser entregada como pro-indiviso a todos los herederos. La única excepción es el 'solar campesino', palabras que los campesinos nunca utilizan pero aparentemente refieren al sitio donde se encuentra la casa misma; en este caso sí puede ser repartido. Dado que hasta en regiones relativamente bien dotadas de tierras como los Yungas, pocas unidades domésticas campesinas poseen más de unas 3 has. de tierra (en parte porque con la tecnología existente y la mano de obra disponible es imposible trabajar extensiones mucho mayores, entonces, si poseen más tierra suelen intentar venderla porque no la pueden mantener bajo cultivo) mientras en otros lugares la posesión promedio por unidad doméstica puede ser media hectárea e incluso menos. Puesto que la herencia (división equitativa entre todos los herederos) es favorecida tanto por la ley nacional de sucesión como por la ley de costumbre, la disposición que prohíbe la división de la tierra sólo servirá para provocar conflictos entre herederos o, al ser ignorada, para incrementar el número ya elevado de personas que no tienen títulos legales de sus tierras.

Estos y otros detalles, sin embargo, tenían poco interés para la mayoría de los participantes en las protestas. Se sospechaba que la ley representaba un intento general de facilitar las cosas para los terratenientes grandes y atacar los derechos campesinos que muchas veces carecen de un apoyo legal formal. Los miedos expresados en sentido que los terratenientes

fuesen a comprar terrenos campesinos y reconstituir las haciendas carecen de una base económica, porque las condiciones productivas en la mayor parte de la región andina de La Paz, tanto Altiplano como Yungas, no obstante su enorme variabilidad, comparten una estructura y rentabilidad tales que sólo la mano de obra impaga de la unidad doméstica permite una rentabilidad mínima. Más bien, los temores deben ser vistos como una metaforización de la persistencia de la jerarquía social supuestamente abolida en 1952, la discriminación anti-campesina en todos los aspectos de la vida social (desde ser echados de restaurantes en el centro de la ciudad aunque estén acompañados por no-campesinos hasta la pobre provisión en salud y educación en áreas rurales) y la percepción del gobierno como anti-campesino por naturaleza y cualquier ley como automáticamente diseñada para dañar los intereses campesinos de una u otra manera. Esta percepción se presenta en la sospecha de que el gobierno desea reinstaurar la tenencia de la tierra por trabajo (la servidumbre de la gleba), es decir, la expresión más notoria de la jerarquía social tradicional, donde una minoría 'criolla' dominaba a las masas 'indígenas'. También era evidente que, para muchos, la ley INRA era un pretexto para salir a las calles y mostrar su ira en contra del gobierno de Sánchez de Lozada que, se sentía, había renegado de la mayoría de sus promesas electorales. Por ejemplo, prometió 500.000 empleos nuevos pero en realidad el desempleo aumentó. Los campesinos no están directamente involucrados en el mercado de trabajo formal, pero muchos de sus parientes cercanos que migran a las ciudades fueron afectados por la pérdida de empleos. Encima de esto, la represión gubernamental de las marchas anteriores y el no haber tomado en serio la marcha de las mujeres cocalleras, había dejado resentimientos. Todos estos factores, combinados con ansiedad respecto a la tenencia de la tierra, produjeron una movilización nacional masiva.

Nuevamente, distintas marchas salieron de varios puntos del país, pero esta vez sólo un núcleo duro de militantes recorrió toda la distancia a pie. La mayoría de la gente salió detrás de ellos, en camiones, para unirse a la marcha a unos 10 o 20 kilómetros fuera del límite urbano y lograr una entrada masiva, programada para el 26 de septiembre (un jueves; es mejor planificar estos acontecimientos para días laborales con fines de causar un máximo de interrupción). Contingentes del Altiplano paceño llegaron el día antes, marcharon por el centro de la ciudad y trataron de invadir la Plaza Murillo, donde fueron gasificados intensamente por el cordón de policías. En la refriega resultante, una mujer que era (excepcionalmente) Secretaria General del sindicato campesino de su comunidad murió sofocada por los gases y/o pisada por la muchedumbre. Se dijo inmediatamente que había sido asesinada por la policía.

Los marchistas de otras partes del país entraron a la ciudad al día siguiente. El contingente del Beni, incluyendo las zonas de colonización y los Yungas, ingresó a la ciudad desde el norte, por Villa Fátima, mientras los de Cochabamba, Potosí y otros departamentos del sur del país, ingresaron desde el oeste por El Alto y bajaron por la zona del Cementerio. Todos se juntaron en una concentración en la Plaza San Francisco para escuchar los discursos de los líderes de Cochabamba y otros lugares, en especial Alejo Veliz, que iba a ser candidato presi-

dencial (por la Izquierda Unida) en 1997. Los yungueños pensaron que él estaba utilizando la movilización para hacer propaganda en beneficio suyo y se quejaron de cómo el contingente cochabambino era conocido como ‘la gente de Alejo Veliz’; propusieron entonces dejar la concentración e ir a bloquear en o cerca de la Plaza Murillo. Las manifestaciones urbanas siguieron durante los días posteriores, muchas veces protagonizadas por grupos pequeños, procedentes de las comunidades de alrededor de la ciudad. Obstaculizaron el tráfico pero los pasajeros en los vehículos parados parecían aprobar su acción, diciendo “*Están defendiendo su tierra, es todo lo que tienen*”. No obstante, la segunda versión (no-consensuada) de la ley fue aprobada sin modificaciones y, dado que se iba a emitir el Reglamento de la Ley INRA que (se esperaba) iba a aclarar algunos puntos problemáticos de la ley, las protestas quedaron en una situación similar a la de las marchas cocaleras: una demostración de la fuerza numérica del campesinado y sus intenciones de defender sus derechos, pero sin logros concretos.

3. Bloqueos urbanos y rurales: la negación del tránsito libre

Bloqueos de gas en la ciudad de La Paz

Casi todos los paceños urbanos cocinan con gas natural licuado. A la vez, pocos cuentan con suministro de gas a domicilio y tienen que utilizar las pesadas garrafas de fierro. Los camiones distribuidores de gas circulan por los barrios; cuando se escucha su bocina distintiva, empleadas domésticas, hijos adolescentes y amas de casa salen a la calle arrastrando sus garrafas vacías para cambiarlas por otras llenas. Cuando el camión no aparece en el momento necesario, se puede comprar gas en las tiendas del barrio, a precio algo más elevado y sin factura. Pero a veces el precio del gas natural sube (o la moneda peruana sube en relación a la boliviana) y resulta más rentable mandar el gas a la frontera para ser vendido en el Perú. En otras ocasiones, hay rumores de que el precio oficial del gas en Bolivia va a subir; entonces los intermediarios ocultan el gas en vez de venderlo al precio vigente. Los camiones dejan de circular, sobre todo en los barrios más pobres y uno tiene que buscar una tienda que tenga garrafas fuera de la vista pero disponibles para los dispuestos a pagar un sobreprecio. Dado el status económico marginal de muchas unidades domésticas urbanas, esta no es una alternativa factible para muchos y sólo los muy recién llegados del campo a los barrios más periféricos todavía tienen un fogón de barro y una reserva de leña para cocinar en él. ¿Qué se puede hacer? La gente necesita comer.

La respuesta espontánea es salir con las garrafas vacías a la avenida principal del barrio y formar una línea con ellas a través de la calle, bloqueando el paso de vehículos. Nunca he participado en tales bloqueos (tengo dinero para gas con sobreprecio y carezco de otros miembros en mi unidad doméstica que tengan tiempo para ir al bloqueo) pero no tengo evidencia de que sean organizados, en el sentido de poseer un liderazgo definido o de que un grupo parti-

cular se ocupe de inducir a otros a juntarse al bloqueo. En este sentido, los bloqueos recuperan el tipo de acción de grupo espontáneo y sin dirección pero ordenado que he observado en momentos críticos en el campo. Por ejemplo, en 1987, un camión lleno de naranjas y con varias personas del lugar encima se volcó en un arroyo en la comunidad donde yo trabajaba. Al escuchar los gritos, todos los que se encontraban cerca corrieron a ayudar, empujaron el camión y sacaron a toda la gente del agua, sin que hubiera alguien que dé órdenes o dirija la actividad.

Evidentemente, el bloqueo como tal no tiene un impacto en el precio del gas en Bolivia o en el Perú o en el tipo de cambio, pero sí impacta en los demás habitantes urbanos que quieren pasar por esa calle y tienen que tomar un desvío o sufrir el embotellamiento consecuente. Pasajeros y, sobre todo, taxistas y dueños de vehículos de transporte público (es decir, la mayoría de los vehículos en las calles de La Paz) llaman a los distribuidores de gas y las emisoras de radio quejándose del bloqueo; los consumidores de gas también llaman, quejándose de la ausencia de camiones de gas donde ellos viven. Estas tácticas parecen tener como resultado la provisión de al menos algunas garrafas llenas en el lugar donde se encuentra el bloqueo. También proporcionan foros para la expresión del resentimiento en contra de los especuladores y el gobierno (hasta la fecha, el único proveedor de gas licuado sigue siendo la empresa nacionalizada YPF y es el gobierno el que dicta el precio oficial del gas), que se muestra incapaz de asegurar el abastecimiento regular de esta mercancía básica. Las emisoras de radio no se molestan en anunciar “Ya hay gas en Villa San Antonio” pero el hecho de que se sigan realizando bloqueos cuando hay escasez de gas indica que la táctica tiene al menos un éxito parcial.

Bloqueos rurales

Los bloqueos rurales han figurado como una táctica campesina en contra del Estado a partir de los 1970s, si no más antes. La famosa ruptura del ‘Pacto Militar-Campesino’, instituido por el dictador René Barrientos en los años 1960s, data de 1974, cuando el presidente de facto Hugo Bánzer (rehabilitado como presidente ‘democrático’ a partir de 1997) respondió a un bloqueo campesino en Cochabamba con balas en vez de la conciliación esperada. El uso más famoso de bloqueos fue en 1982, cuando campesinos opuestos a la dictadura “García Meza” (así conocida aunque el nombrado fue presidente titular sólo durante el primer período de la dictadura 1980-82) aplicaron bloqueos hasta virtualmente cortar el abastecimiento de víveres a la ciudad de La Paz, contribuyendo así en gran medida a la caída de la dictadura y su reemplazo por una serie de gobiernos formalmente democráticos que ha seguido hasta hoy. Con frecuencia, hay bloqueos locales protestando contra incrementos de pasajes, falta de provisión educacional (muchas veces en apoyo a la huelga del magisterio) o atención caminera y otros problemas relacionados con la autoridad estatal. Después de la movilización masiva en contra de la

Ley INRA de septiembre de 1996, la mayoría de los manifestantes regresaron al campo, pero la directiva campesina nacional declaró una política de bloqueos rurales hasta la aprobación de la ley.

Hay dos tipos de bloqueo rural: 'permanente', con gente en el lugar bloqueando veinticuatro horas al día y 'relámpago', cuando se bloquea el camino durante unas horas (sobre todo cuando se trata de un problema puntual que se puede solucionar de inmediato) o se echa un tronco o piedras al camino, a veces dinamitando un barranco para que se derrumbe sobre la ruta, y retirándose dejando el lugar inhabilitado para el paso de vehículos, a menos que los conductores quieran trabajar alzando los obstáculos. En caso de un bloqueo permanente, se utiliza el mismo tipo de obstáculos y la presencia de los bloqueadores impide que sean retirados.

En la campaña de 1996, sólo hubo un bloqueo permanente en todo el país, en la carretera troncal entre La Paz y Chulumani (Sud Yungas). La ubicación del bloqueo representaba una especie de conflicto fijo: estaba en Milliscuni, un sitio utilizado para varios bloqueos en el pasado (de la misma manera que los estudiantes de París en 1968 levantaban barricadas en sitios usados para el mismo fin durante la Comuna de París). Inicialmente, se pensaba bloquear en Puente Villa, donde se unen los caminos a Chulumani y a Coripata (Nor Yungas), pero el ejército se adelantó y ocupó Puente Villa (que más bien representa uno de los puntos fijos de control estatal en las rutas de Yungas; después de la tranca permanente en Unduavi, cuando se pone trancas adicionales, Puente Villa es uno de los lugares para ellas) el 6 de octubre. El 7 de octubre, los campesinos ocuparon Milliscuni; bloquearon el camino con piedras y cavaron zanjas a través de él. Los sindicatos comunales ordenaron a todos sus miembros participar en el bloqueo en turnos de veinticuatro horas y los que no querían o no podían ir personalmente tenían que pagar a un suplente o si no pagar multas al sindicato. El 8 de octubre, vehículos llegaron de La Paz, con dirección a Asunta; sus choferes y pasajeros (incluyendo varios marchistas camino a casa) casi pelearon con los bloqueadores, pero al final acordaron cruzar el bloqueo a pie y tomar camiones que esperaban al otro lado, con permiso de la Federación Campesina para viajar hasta Asunta. Las movildades tenían que esperar en Milliscuni o volver a La Paz, no se dejaba pasar ni una.

Al día siguiente, el ejército se presentó por el camino para romper el bloqueo. Los bloqueadores lo desafiaron a disparar sobre ellos y se retiraron. Luego mandaron tropa por el cerro encima del bloqueo; los bloqueadores hicieron reventar unas dinamitas y siguieron firmes. El ejército no estaba dispuesto a insistir y simplemente se quedó en el lugar. Mientras tanto, la CSUTCB había llegado a un compromiso a nivel nacional con el gobierno y consintió en levantar los bloqueos, que en todas las otras regiones del país habían sido del tipo relámpago. Enterados de esto, los oficiales del destacamento se acercaron a la barricada y solicitaron la retirada de los campesinos. Dado que ya no tenían el apoyo de su organización

matriz, éstos consintieron en hacerlo. Cantaron el Himno Nacional (durante el cual todos los militares asumieron posición de firmes) y luego se retiraron marchando ‘en buen orden’, para señalar que eso había sido un pacto y no una rendición, mucho menos una derrota.

Este bloqueo es el único sobre el cual tengo información participante detallada.¹⁷ Los Yungas dependen del comercio permanente de la coca y el comercio estacional del café y de diversas frutas, cuyo centro mercantil está en La Paz; por lo tanto, los yungueños suelen ser renuentes a establecer bloqueos, mientras aquellas regiones que tienen una relación más intermitente con el mercado están más dispuestas a realizarlos. El hecho de que en esta ocasión Chulumani hubiera montado el único bloqueo permanente en todo el país, tiene que ver con los conflictos constantes entre los productores de coca y el Estado. La intención ya no era tanto protestar en contra de la Ley INRA sino mostrar la disposición radical de los productores de coca como amenaza para gobernantes actuales y futuros. Chulumani tiene una reputación radical desde hace unos siglos (después de ser descuartizado, se mandó la pierna de Tupaj Katari a ser expuesta allí en 1782, como escarmiento a los que le apoyaban; esto todavía se recuerda en la tradición oral local, aunque a la vez es la única cosa que se recuerda de Tupaj Katari), reforzada por la ‘masacre’ (o linchamiento) de los policías de la fuerza anti-narcóticos acuartelados en el pueblo, en octubre de 1982 (Spedding 1994). Como consecuencia, las fuerzas represivas del Estado no pisan fuerte en la región. No obstante, se sentía una necesidad de mostrar que la voluntad rebelde estaba viva y coleando, necesidad justificada por las declaraciones del nuevo gobierno de Bánzer (en fecha 27.8.98 y muchas veces después) que aceptó las declaraciones estadounidenses sobre coca ‘excedentaria’ en los Yungas y luego inició campañas más intensivas de erradicación forzosa en el Chapare. A mediados de 1998, éstas habían dado como saldo varias muertes más, tanto de campesinos como de integrantes de las fuerzas represivas. Otra movida oficial fue la declaración (en agosto de 1998) de que los carnés de productores de coca ya no serían distribuidos por medio de los sindicatos campesinos sino por la agencia estatal DIGECO, aunque hasta la fecha esto no ha ocurrido (DIGECO sólo se encarga de los permisos de comercialización en el interior del país). Posteriormente, se dieron otros bloqueos en la región, por ejemplo en abril 2000, en contra de las propuestas de erradicación y otras medidas estatales.

Conclusiones o, más bien, interrogantes

Es interesante comparar la ubicación de los bloqueos (negación popular del libre tránsito) con la de las trancas (negación estatal del libre tránsito). Estas últimas se ubican en los puntos de

¹⁷ Gracias a Abraham Colque Jiménez, en ese entonces asesor de la Federación Campesina. Yo solo fui ‘sindicalizada’ en la comunidad a partir de 1997, por lo tanto, en 1996 no estaba permitida/obligada a participar.

entrada/salida de las principales poblaciones urbanas (con rango de capital de sección de provincia para arriba) o en los cruces de caminos. Aparte de Puente Villa, donde había una tranca bajo García Meza y el camino a Coripata se divide a Chulumani, la tranca permanente de Unduavi (figuró en las protestas de abril de 2000, se pidió que los Leopardos dejaran de maltratar a los pasajeros de allí) se ubica a poca distancia del lugar donde la carretera que va a Coroico y Caranavi se divide de la que va a Sud Yungas e Inquisivi, controlando por lo tanto todo ingreso y salida de las cuatro provincias. El otro sitio en Sud Yungas donde regularmente se monta trancas temporales (durante unas horas o días) es ‘el cruce de Chimasi’, donde la ruta a La Asunta se divide de la que sigue hasta Irupana e Inquisivi. Milliscuni, mientras tanto, es un sitio a media ruta entre Puente Villa y Chulumani, alejado de cruces importantes. Evidentemente, un factor es que los bloqueos populares representan intervenciones ‘defensivas’ –en contra de las disposiciones estatales o, en el caso de los bloqueos urbanos (que también se realizan en media avenida y no en cruces), en contra de grupos sociales más poderosos que los bloqueadores, como los transportistas que quieren hacer subir los pasajes o los distribuidores de gas licuado– y también tienen que asumir estrategias defensivas debido a su acceso limitado a material bélico. Las trancas más bien son intervenciones ‘ofensivas’ –intentan ampliar el control, sujetar a otros y tienen un acceso mayor (aunque no necesariamente ilimitado) a las armas y otros insumos para el conflicto. Entonces, se entiende por qué prefieren sitios como un cruce de caminos que permite expandir su acción en varias direcciones, mientras para un bloqueo es más conveniente un sitio donde el acceso, al menos para motorizados, es restringido. A la vez, es significativo que el cuartel de UMOPAR (los ‘Leopardos’) se ubique en Irupana, sobre el camino que sale hacia Inquisivi. Se considera que lo eligieron para protegerse de los pobladores de Chulumani¹⁸ que, como capital de provincia, es el lugar indicado para su establecimiento. Pero cuando quieren controlar o requisar a las movilidades que entran o salen de Inquisivi, prefieren dejarlas pasar hasta Irupana y pararlas en el mencionado cruce de Chimasi. Estas consideraciones (permitir o facilitar expansión en varias direcciones a la vez) pueden tener algo que ver con el uso ritual de cruces de caminos como lugares para deshacerse de la contaminación ritual.

Los bloqueos (interrupción del movimiento, imposición del estasis) no poseen una estructura jerárquica. O son enteramente anárquicos (los bloqueos de gas) o, si son organizados, no es por parte del liderazgo oficial o establecido (en el bloqueo de Milliscuni, un Comité de Bloqueo anónimo reemplazó al Comité Ejecutivo de la Federación). Nótese que se propuso un bloqueo en contra de la personalización ‘excesiva’ del liderazgo en la movilización contra la Ley INRA. Las marchas (imposición del movimiento, apertura forzosa de la vía) sí parecen poseer una estructura jerárquica. Esto ocurre ¿simplemente porque la marcha tiene una dirección y, por lo tanto, tiene que tener alguien en la cabeza y alguien en la cola, mientras un

18 Quienes masacraron a los policías de Narcóticos acuartelados en el pueblo, en octubre de 1982. Después de ese acontecimiento, las fuerzas antinarcóticos abandonaron la provincia y volvieron recién en 1987.

bloqueo mira simultáneamente en todas las direcciones? ¿O hay alguna diferencia más fundamental? Como se acaba de destacar, el Estado jerárquico también echa mano de la interrupción del movimiento (trancas) en varios contextos, sugiriendo que el bloqueo en sí no es necesariamente anti-autoritario.

Se observa la misma ausencia de liderazgo formal en los ‘breves alzamientos modernos’ (Spedding 1996b:277) como los de 9.4.1996 en La Paz o el de Caranavi, que ocurrió al mismo tiempo que el bloqueo de Chulumani: los amotinados quemaron la Alcaldía y unas movilizaciones municipales que habían sido mandadas para limpiar los obstáculos dejados por bloqueos relámpagos. Estos acontecimientos son anárquicos. Por supuesto, hay ciertas personas con roles más protagónicos (se adelantan y otros los siguen, sus gritos animan a los demás, etc.) pero no hay un liderazgo como tal.¹⁹ Este hecho preocupa a los izquierdistas ex-vanguardistas que quisieran fomentar este tipo de acontecimientos pero no ven cómo. También pone en cuestión qué tipo de continuidad existe entre estos estallidos intermitentes que aparentan desaparecer en gran parte de la memoria pública y verbal en tanto que terminan. Es obvio que, de un lado, el registro oficial (incluyendo periódicos a la vez que archivos) tiene interés en borrar estos hechos (escritos actuales que tratan del período de la UDP hacen hincapié en el caos económico, pero sólo he encontrado referencias verbales a, por ejemplo, los saqueos de tiendas) o, en su caso, reducirlos a la representación más negativa posible. También es evidente que los que han sido más o menos protagonistas no van a publicar su participación excepto en círculos limitados de plena confianza. Todo esto hace difícil entender cómo es que todavía parece haber cierta continuidad entre estos hechos. Una respuesta parcial puede ser encontrada en la idea de una ‘memoria silenciosa’ inscrita en el espacio (ver infra). Lo que sí se puede concluir, de entrada, es que la dificultad que tenemos frente a este tipo de acontecimientos demuestra que *todas* nuestras teorías sociales son básicamente de la elite, incluso en caso de haber sido desarrolladas por lo que Bourdieu llama ‘la fracción dominada de la clase dominante’.

La elite se autopercibe como un grupo restringido que controla y dirige los acontecimientos. Dejando de lado la cuestión de si es verdad que la elite dirige incluso lo que ellos y otros creen que dirigen, el resultado es que en cada situación social siempre se busca un pequeño grupo dirigente. Respecto a los disturbios populares, la versión oficial/negativa identifica a este grupo como ‘cabecillas’, ‘subversivos’, ‘instigadores’, etc., mientras la versión izquierdista/voluntarista lo llama ‘la vanguardia’, ‘los cuadros’, etc. Dado que la existencia de este grupo es una suposición a priori, no es sorprendente que ambas corrientes generalmente logren identificarlo cuando se empeñan en hacerlo. Estamos más dispuestos a creer que esta es

19 Rude (1964/1971:258) llega a conclusiones similares respecto a la ausencia de liderazgo definido en los disturbios populares en Francia e Inglaterra en los siglos XVIII y XIX, aunque no prosigue en la consideración de si esto corresponde a una aporía teórica en tanto no se logra explicar cómo surgen los motines.

una intervención ilusoria cuando el gobierno se afana en enjuiciar a unos ‘instigadores’ con pruebas poco convincentes; podemos estar más dispuestos a creer que sí existía algún grupo de personas que se alistaron para la sublevación y se pusieron en movimiento inmediatamente llegó el hecho detonante, sobre todo si se encuentra a alguien que asevera haber sido miembro de este grupo. Sin embargo, se debe notar, primero, que el hecho de haber sido uno de los que corría en las primeras filas de la muchedumbre no quiere decir que realmente la dirigía y, segundo, que la naturaleza enteramente impredecible y horripilante de los hechos detonantes (típicamente un asesinato, una violación u otro acto que va totalmente en contra de los principios más generales del grupo que se levanta) hace muy difícil organizarse con la esperanza de que algún día han de ocurrir. El hecho de que sean impredecibles tiene mucho que ver con su poder detonante, porque pescan tanto a la elite como al populacho (que no es necesariamente radical en todo momento o contexto) en posición desprevenida. Ni las sectas religiosas que se organizan alrededor de la próxima llegada del apocalipsis suelen durar mucho (o se derrumban o se reorganizan alrededor de algún principio más conservador que hace retroceder a la segunda venida de Cristo en el tiempo) mientras la izquierda voluntarista se exaspera esperando los detonantes y muchas veces decide iniciar la ‘lucha armada’ u otro detonante automanufacturado, con las conocidas consecuencias negativas. Es decir, no tenemos una teoría de la acción social acéfala (o indocumentada) desde abajo.²⁰

Las marchas pueden utilizar las carreteras modernas pero también reactivar los antiguos caminos de herradura o de a pie; una especie de memoria silenciosa en acción. Aunque varios investigadores han tratado de encontrar la tradición oral sobre Tupaj Katari en los Yungas, como ya se comentó, sólo se recuerda que ‘*su pie está en Chulumani*’; no se recuerda, por ejemplo, la huida de los vecinos hacia Ayopaya, pero los chapareños volvieron por esos mismos caminos dos siglos después. El hecho de que el ejército no imaginó que los yungueños iban a aparecer en Pampahasi y los esperó por la carretera donde fueron parados la vez anterior, también sugiere que estas rutas corresponden a una percepción del espacio que es dife-

20 Bourdieu (1984:228), con referencia a los eventos de mayo de 1968 en París, constata que los acontecimientos críticos que fueron el origen cronológico de la crisis ‘*pueden compartir una parte de accidente (imputable a factores externos al campo, como la violencia policíaca*’ (traducción mía). Previamente, en la misma obra, propone ‘*un modelo general de los procesos revolucionarios: la ruptura objetiva del círculo de esperanzas y de oportunidades conduce a una fracción importante de los menos dominados entre los dominados...a salir del camino, es decir de una lucha de competencia implicando el reconocimiento del juego y de las apuestas puestas por los dominantes, y a entrar en una lucha que se puede llamar revolucionaria en tanto que ella apunta a instituir otras apuestas*’ (op.cit.:225-6). Lo de los acontecimientos detonantes accidentales me parece cierto, pero en la segunda cita vemos aparecer otra vez la vanguardia. Si queremos saber quiénes son estos luchadores, nos dice que ‘*Marx sugería que de vez en cuando, algunos individuos llegan a liberarse tan completamente de las posiciones que se les asigna en el espacio social que ellos pueden comprender ese espacio como un todo y transmitir su visión a los que son todavía presos de la estructura*’ (op.cit.:47). Estos individuos afortunados, pero, son como los elegidos del calvinismo: ¿cómo podemos saber si nosotros, o cualquier otra persona, somos parte de ellos?

rente a la percepción que tiene el Estado, aunque puede ocurrir también que la diferencia corresponda a valores distintos y no a una percepción realmente distinta; algo parecido a la diferencia entre tranca en cruces y bloqueos a medio camino (debido al menos en parte a intereses estratégicos diferentes) o las percepciones inversas de la delincuencia en el campo y en la ciudad expresadas por habitantes urbanos y rurales (citados en Spedding 1996b: 252). Se necesitan mejores datos sobre el despliegue espacial de los conflictos, las rutas utilizadas y los lugares donde se bloquea o pelea, algo que suele ser descartado en gran medida para concentrarse en los personajes (en la historiografía tradicional) o los grupos sociales en conflicto (en la moderna). Por ejemplo, se habla de como ‘los campesinos’ ayudaron a derrotar la dictadura con sus bloqueos, pero no conozco estudios que se ocupen de señalar exactamente dónde y cómo se realizaron esos bloqueos.

Estudios recientes de las marchas cocaleras, como el ensayo de Natalia Camacho en Laserna, Camacho y Córdova (1999), no incluyen un solo mapa, ni siquiera una descripción verbal detallada de las rutas o sitios de enfrentamientos. Peor aún, no sólo asumen automáticamente una percepción de elite, que como ya dije es difícil evitar cuando uno quiere ser ‘analítico’ (las únicas versiones subalternas que se conoce de este tipo de acontecimientos suelen parecer meramente anecdóticas o hasta míticas, es decir, incluyen referencias a entidades ‘sobrenaturales’ no reconocidas como realmente actuantes en el mundo dentro del discurso académico) sino, en el caso de Camacho, se acercan a una de las perspectivas más estériles, el de la ‘ciencia política’ de filiación estadunidense. Las fuentes utilizadas parecen ser de la prensa, es decir, versiones oficiales, enfocando instituciones oficialmente reconocidas; no aparece ningún testimonio de alguien que participó en la marcha. Cada marcha se resume en un esquema de Presión (desde abajo, por supuesto, el gobierno no ‘presiona’ con sus disposiciones) – Negación (el gobierno niega las demandas y trata de desprestigiar la movilización) – Reconocimiento (el gobierno admite que realmente hay una marcha, que no se trata de ‘fantasmas’ o unos pocos descontentos no-representativos) – Acercamiento (el gobierno acepta la llegada de los marchistas) – Negociación (se llega a firmar algún convenio con expresiones bienintencionadas y vacías que no se implementa en la práctica). La etapa de ‘Acercamiento’ parece mezclar posiciones espaciales con posturas políticas de las partes en conflicto, mientras el hecho de que la ‘Negociación’ rara vez llega a concesiones o logros concretos puede ser visto igualmente como otro indicio de la naturaleza ritual de estas protestas, como el acto de escuchar misa, que muestra que uno es católico y bien visto por Dios, pero no se espera que produzca cambios inmediatos en el mundo material y tampoco convierta directamente a los evangélicos. Igualmente, en las marchas, los campesinos y el gobierno muestran quiénes son y dónde están parados, pero ninguno logra que el otro cambie de opinión; es una guerra de posiciones, no un intento de tomar territorio ajeno. Espero que las observaciones en este ensayo, junto con la constante aparición de estas tácticas en el escenario político y espacial de Bolivia, impulsen a algunos investigadores a intentar algunos estudios fuera del marco oficial y documentado, que permitan acercarse más a la realidad de estos conflictos.

4. Postscripto escrito en noviembre de 2000

La mayor parte de este ensayo fue escrito hacia fines de 1997. Los acontecimientos de 2000 –los bloqueos en Cochabamba y el Altiplano en abril y el bloqueo nacional de caminos en septiembre-octubre del mismo año– le han dado un toque de actualidad. En el medio político y mediático, estos bloqueos y (en el caso de Cochabamba en abril) las manifestaciones masivas que los acompañaban han suscitado diversos comentarios. La empresa privada (como es habitual por parte de este sector en cualquier país) enfatizaba las ‘pérdidas’, o sea, el dinero que aseveraban hubieran ganado si los bloqueos no hubiesen ocurrido. En algunos casos, como los pollos de granja que tenían que ser sacrificados por falta de alimento y de ventas, se puede hablar de pérdidas concretas, pero la mayor parte de estas pérdidas corresponden a proyecciones no-cumplidas de negocios posibles, no algo que ya se tuvo y se perdió. Es notable que, tanto en el Chapare como en los Yungas, fuertes protestas de este tipo emanaban de los hoteleros, cuyos ingresos proceden netamente de los que viajan y llegan desde fuera de la región; no se escuchaba quejas por parte de rescatadores de productos del lugar, mientras los pequeños productores rurales mismos eran los que en su mayoría montaban los bloqueos. En la ciudad, al menos inicialmente, el rechazo provino más de aquellos sectores que ‘tenían’ que comprar carne fresca a precios elevados, mientras los sectores populares, que raras veces comen carne, no se quejaban tanto, hasta que la cebolla también empezó a subir; sin embargo, todavía persistía un abastecimiento amplio de harina para el pan y alimentos secos como arroz, fideo, papa, chuño, etc., que forman la mayor parte de la dieta de esas clases. Mientras tanto, en los bloqueos se controlaba a los que no podían esperar más y empezaban a trasladarse de un lugar a otro a pie, revisando sus mochilas o bultos para asegurarse de que no llevaban ‘quesos o verduras’, es decir, los productos frescos de los cuales se intentaba privar la ciudad (testimonio de Sebastián Quispe que caminó de Sorata hasta La Paz). El bloqueo demostró hasta qué punto las ciudades dependen de los productos alimenticios que llegan del campo, o de todos modos son traídos de otras partes, aunque es de notar que esta dependencia, también de la industria de insumos no-almacenados, es mucho menor que en Europa, donde un bloqueo total de una semana hubiera dejado vacíos los supermercados, la población a punto de amotinarse en demanda de comida y las fábricas paradas.²¹

El enfoque de este ensayo, sin embargo, no es el impacto económico de los tipos de protesta estudiados sino sus procesos de organización y liderazgo y sus trayectorias en el espacio. El hecho de que los bloqueos hayan servido para elevar el perfil personal de Felipe Quispe Huanca (‘de terrorista a presidenciable’, titular de la revista *Datos* a fines de octubre de 2000)

21 Debido a que los métodos modernos de gerencia favorecen el abastecimiento *just in time* –‘baja la raya’– es decir, sólo cuando el *stock* del producto o insumo en cuestión está por acabar, se solicita una entrega nueva, para minimizar los costos de almacenamiento. Si no hay transporte disponible al momento para cumplir con la entrega, las bodegas quedan vacías.

no quiere decir que él como individuo los dirigió. Aunque había una dirección general de la cúpula de la CSUTCB indicando que se debía salir al bloqueo, dependía de las organizaciones locales si acataban o no, cómo y donde. El hecho de que Quispe fuera a consultar a sus bases antes de firmar el acuerdo con el gobierno no era sólo una pose. Los bloqueos se realizaron incluso en regiones como Bautista Saavedra, donde el aparato supracomunal del sindicalismo (subcentrales, centrales, etc.) es casi inoperante; se bloqueó la cumbre de Pumasani, al parecer, en base a acuerdos con referencia a relevos y abastecimiento entre sindicatos comunales. Será otro tema para investigar, no sólo cómo se organizaron en situaciones parecidas sino cuáles fueron los motivos o las demandas que motivaron a la gente a participar; hasta qué punto se identificaron con la lista de demandas, presentada por el liderazgo nacional o si tenían otras motivaciones, más locales y particulares o más difusas (como el rechazo generalizado a un gobierno percibido como corrupto e incompetente).

Respecto a la ubicación geográfica de los bloqueos, tengo más información sobre Sud Yungas. En abril, se realizó un bloqueo en Tayacala, más arriba de Chajro, entre Puente Villa y Chulumani pero más cerca a Puente Villa que el lugar de Milliscuni donde se acostumbraba bloquear en el pasado. Tayacala se ubica en un pequeño cruce local, de donde sale el camino ramal a Yarija, pero su principal ventaja estratégica parece ser que desde allí se puede observar todo el camino hacia Puente Villa y controlar las movilidades que entran. Después de una semana, los bloqueadores de Sud Yungas se trasladaron en convoy al bloqueo en Nor Yungas, en Chicaluyo, en el camino entre Unduavi y Coroico. Primero mandaron a unas cincuenta personas en calidad de relevo, llevando comida. Los vecinos de Coroico intentaron bloquear el camino que sale de Coroico hacia Coripata, por donde se entra desde Sud Yungas y cerraron sus negocios para no vender comida a los bloqueadores, pero se retiraron cuando llegó el convoy general. Chicaluyo es un lugar mucho más estratégico que Tayacala. El camino da la vuelta alrededor de una loma desde donde se puede bajar a bloquear a ambos lados y, además, hay comunidades a su alrededor de donde obtener agua y abastecimientos. Este fue el lugar donde las autoridades de gobierno se presentaron a negociar con los bloqueadores, mientras el bloqueo en Sud Yungas era ignorado por los medios y sólo conocido a nivel provincial. Los participantes en el bloqueo eran básicamente de las zonas cocaleras de Nor y Sud Yungas. No recibieron apoyo de Caranavi, cuyos habitantes tienen que pasar por Nor Yungas para llegar a La Paz. Su rechazo probablemente se debió en parte a que acababan de soportar unas semanas de bloqueo provincial en abril y también a que ellos consideraban que ese bloqueo era en contra de la erradicación de la coca, un tema que no les afecta;²² incluso trataron a los cocaleros como narcotraficantes. Los yungueños se disgustaron con Felipe Quispe porque, según ellos, al solucionar los conflictos de abril, él no dio importancia a las demandas cocaleras. Se nota

22 Al menos en ese entonces. Sólo en 2001 salieron denuncias oficiales de la producción de coca en Caranavi y propuestas de erradicación de la misma. Representantes de ese sector no participaron en las negociaciones con el gobierno sobre la erradicación en los Yungas en 2001.

que en octubre los coccaleros yungueños sí tomaron parte en las negociaciones con el gobierno, mientras los del Chapare negociaron aparte, pero dado que este ensayo trata del departamento de La Paz no voy a considerar cómo ocurrió esta división en el movimiento popular, aunque evidentemente fue un error en términos de estrategia general.

En septiembre de 2000, en Sud Yungas se bloqueó Puente Villa; no llegaron a bloquear hasta Unduavi, donde se unen todas las carreteras de Nor y Sud Yungas e incluso el tráfico que llega del Alto Beni que pasar por allí. Se recuerda que en los años 1980 (durante la Unidad Democrática y Popular) se realizaron bloqueos en Unduavi y hubo problemas con los transportistas del Alto Beni que querían pasar y no simpatizaban con las demandas que motivaron el bloqueo. La amplitud de un bloqueo y, sobre todo, el hecho de bloquear cruces de caminos principales desde donde se puede impedir el movimiento de muchos lugares distintos depende entonces del alcance de las motivaciones que provocan tal acto. En los Yungas, el tema de la coca suele predominar en las movilizaciones y como la coca no es importante en Caranavi y el Alto Beni, parece difícil que estos sectores se unan con las zonas coccaleras. En el Altiplano, las demandas de septiembre-octubre de 2000 recibieron el apoyo general de la población y, en algunos casos (como Batallas), también de las autoridades municipales. Se bloqueó la carretera que sale de La Paz con dirección a la orilla oriental del Titicaca, casi a partir de la tranca de San Roque, con piedras derramadas a cada paso y bloqueos grandes, con presencia de gente, a intervalos incluyendo el cruce de Peñas, Patamanta, Batallas, Huarina, a unos cientos de metros antes de entrar al pueblo de Achacachi, Ancoraimas y Carabuco; el camino a Copacabana, Chua y Tiquina estaba bloqueado. El camino que llega a la frontera peruana en Desaguadero fue bloqueado en Vilaque y Guaqui, entre otros lugares, y los peruanos que estaban en La Paz no pudieron salir a su país. Con dirección al sur, el camino que sale de Patacamaya hacia la frontera con Chile fue bloqueado en Curahuara de Carangas y hubo un bloqueo masivo en Conani, que es donde la carretera que da entrada a toda la provincia Inquisivi se une con la Panamericana yendo a Oruro. También se bloqueó Caracollo, de donde parte la carretera principal a Cochabamba, quedando varados varios vehículos del transporte pesado a larga distancia. Las rutas que salen de La Paz hacia Río Abajo y otros lugares de la provincia Murillo no tienen importancia en términos de viajes interdepartamentales o internacionales, pero sí para el abastecimiento de verduras y otros productos en la ciudad. A partir del tercer día de la movilización, los pobladores empezaron a bloquear en Palca, al parecer debido a rumores de que si no lo hacían 'los de Omasuyos' iban a ir a imponer la acción; luego sus bloqueos se extendieron cada vez más, hasta llegar casi a los barrios periféricos de la Zona Sur de la ciudad.

Quedó demostrada la efectividad de la técnica del bloqueo para conseguir la sumisión de la oposición, en este caso, el gobierno. Lo que no me parece tan cierto y esto puede tener mucho que ver con su naturaleza de movimiento surgido desde abajo y, en el fondo, acéfalo, es que las demandas aceptadas por el gobierno conforman un conjunto coherente que real-

mente vaya a cambiar las malas condiciones que impulsaron a los bloqueadores a actuar. De hecho, este suele ser un aspecto de lo que en otra parte (Spedding y Colque en preparación, cap.1) he denominado el ‘poder demótico’: surge en forma reactiva, respondiendo a actos o desarrollos en otros niveles sociales, exigiendo típicamente derogaciones o modificaciones pero, en muy raros casos, proponiendo un programa alternativo autónomo. Uno de los logros principales de las últimas movilizaciones es la derogación de la Ley INRA. Cuando esta ley fue promulgada, varios intelectuales opinaron que había sido pensada para grandes propiedades en el Oriente, para poner fin a la usurpación de tierras allí y la expansión de latifundios improductivos, pero hasta uno de sus autores intelectuales ahora considera que el proceso de saneamiento en el Oriente *‘está siendo más bien utilizado como una herramienta para legalizar lo ilegítimamente obtenido’* (Urioste 2000:88), mientras en el Occidente del país las previsiones de la ley son tales que no empeoran ni mejoran la situación de la pequeña propiedad campesina sino simplemente resultan irrelevantes (Llanos y Spedding 1998:73-6). No está mal que deroguen esa ley mal hecha pero, ¿con qué se la va a reemplazar? Es de suponer que algunos representantes campesinos vayan a participar en la preparación de la sustituta pero habrá que esperar que sean más inteligentes que los que participaron en las consultas para la anterior ‘versión consensuada’ de la Ley INRA, que sólo se preocuparon por el tema de tratar de conseguir una mayoría campesina en la Superintendencia Agraria, o sea, una cuestión netamente cupular. El hecho de que Felipe Quispe, al parecer, piense fundar *otro* ‘instrumento político’ bajo el nombre de Movimiento Indio Pachakuti, me sugiere que tampoco se interesará en los enrevesados detalles de costumbre de la ley que actualmente determinan la tenencia de la tierra en las comunidades, ‘leyes’ que son conocidas exclusivamente en sentido práctico (y no discursivo) por parte de los mismos comunarios y nadie más. De un lado, por razones de desconfianza histórica, los comunarios evitan comunicar detalles de la tenencia de la tierra a extraños y, de otro, si uno les consulta presentan un resumen ideal que no representa el sistema real. Comparo, por ejemplo, la complejidad real del sistema de herencia en Chari (Llanos y Spedding op.cit.:59-67) con lo que nos dijeron los comunarios en un seminario sobre la Ley INRA llevado a cabo allí: *‘Nos damos [tierra] a todos [nuestros hijos] por igual’*.²³ Al final, es probable que los representantes –por cualquiera de los lados– que negocien la Ley INRA II sean más burócratas que otra cosa, no obstante su afiliación

23 Una simple ‘codificación’, es decir, registro escrito de los ‘usos y costumbres’ citados en cada lugar tampoco sería satisfactorio. En primer lugar, quitaría a los sistemas prácticos una de sus principales virtudes, su flexibilidad. Se requeriría investigaciones detalladas con la participación conjunta de gente del lugar e investigadores capaces de comprender la jurisprudencia desde otra perspectiva que la que se enseña en las Carreras de Derecho de este país. No será fácil conseguir gente capacitada para tal tarea. Conozco dos proyectos de investigación, dirigidos por Burkhart Schwarz y Marcelo Fernández, que intentaron conformar equipos multidisciplinarios incluyendo a abogados (o egresados en derecho) para estudiar las formas jurídicas comunales. En ambos casos, cambiaron repetidas veces de personal y terminaron, en el primer caso, con una abogada paraguaya y, en el segundo, con una española, porque todos los bolivianos resultaron totalmente incapaces de entender otro enfoque que el totalmente literal y rígido que prevalece en los foros jurídicos aquí.

política o clase social de origen y, por lo tanto, que simplemente no quieran entregar las decisiones sobre la tierra a las autoridades comunales y darles plena jurisdicción, porque eso desemplearía a notarios, jueces, abogados, funcionarios de la Reforma Agraria (que incluiría a miembros de cualquier tipo de Superintendencia, incluyendo a los ‘campesinos’), diversos hONGos²⁴ metidos en el tema (como Tierra, del mencionado Urioste)... Otro tópico que muestra la misma tendencia de reaccionar y criticar pero no de proponer es el relativo justamente a los hONGos que trabajan en el campo. Se exige una lista completa de ellos y una fiscalización, o sea, cuánto de plata manejan. Yo he visto las mismas demandas en la Federación Campesina en Chulumani con referencia al hONGO que, para evitar posibles calumnias (dado que el contenido etnográfico de este ensayo procede generalmente de lo que, más que ‘historia oral’, es la ‘actualidad oral’ y por lo tanto, posiblemente sesgada y no siempre bien fundada), llamaré como hemos hecho en ‘Flor de Clavel’ ‘Ch’amaka’.

Los campesinos están conscientes de que, por un lado, suele haber poca transparencia de manejo y mucho gasto descuidado de los fondos de estas organizaciones y, por otro, que la mayor parte del dinero se va en sueldos y otros gastos de operación y poco llega a manos de los supuestos beneficiarios. Esto es lo que quieren demostrar con la fiscalización. Pero es otra cosa proponer una forma más útil (al menos para los campesinos, pues la forma actual es bastante útil para la clase media) de distribuir ese dinero, dado que es poco probable que las entidades financiadoras consientan simplemente en eliminar a la mayoría de los empleados e incluso los programas y repartir el dinero directamente en efectivo entre los campesinos, sin controles ni limitaciones.

Pero aunque las movilizaciones populares suelen surgir en respuesta a acciones ‘desde arriba’, no es parte esencial de ellas que sólo presenten demandas negativas (pidiendo la cancelación o control de medidas existentes). En las movilizaciones de septiembre-octubre había también demandas positivas: la propuesta de una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución Política del Estado, el pedido de un cato de coca por familia en el Chapare. Es notable que, a diferencia de las demandas negativas, las positivas hayan sido rechazadas de forma tajante hasta la fecha. Esto puede deberse en parte al autoritarismo rígido y sin comprensión de este gobierno (más evidente en el comportamiento de Guillermo Fortún frente a los cocaleros del Chapare, pero inherente a la totalidad de las posturas oficialistas). Sin embargo, es también el caso que, al pedir que se derogue tal ley y que se reemplace por otra, por maravillosa que sea esa nueva ley, uno sigue admitiendo que se requieren leyes para ordenar la vida social y que las instancias existentes son las calificadas para hacerlas. Por el contrario, la Asamblea Constituyente sugiere que las instancias existentes (parlamento, poder judicial...) NO son capaces de definir reglas adecuadas para la vida pública del país y que hay que buscar otras formas, aunque apenas se vaya palpando cuáles podrían ser. La trayectoria

24 Se llaman hONGos porque surgen de la noche a la mañana y generalmente en los lugares más podridos.

última de Felipe Quispe, entonces, demuestra que, tras un barniz de protesta y oposición, en realidad él es tan reaccionario como el mismo Fortún y compañía y resulta enteramente apropiado que termine fundando un partido político, demostrando así que acepta 100% las reglas del juego existente. En resumen: las movilizaciones populares de este año han avanzado cierta distancia, pero si buscan cambios reales no han llegado ni hasta medio camino.

5. Segunda posdata: el rechazo a la militarización en Sud Yungas, junio 2001

Los acontecimientos que atrajeron atención a nivel nacional en Sud Yungas en junio de 2001 tuvieron sus orígenes muchos años atrás, en la disposición de la Ley 1.008 (19 de julio de 1988) que distingue la zona de producción tradicional de coca de la de producción excedentaria en transición. De hecho, la ley no es clara, ya que en el Artículo 9 define la zona tradicional como *'las áreas de producción minifundaria actual de coca de los subtrópicos de las provincias de Nor y Sud Yungas, Murillo, Muñecas, Franz Tamayo e Inquisivi'* en el departamento de La Paz, mientras el Artículo 10 cita como de producción excedentaria *'las provincias Saavedra, Larecaja y Loayza [y] las áreas de colonización de Yungas'* de La Paz. Estas disposiciones padecen de varias ambigüedades. El 16 de diciembre de 1992, se creó la provincia de Caranavi, que antes formaba parte de Nor Yungas; al no haberse cambiado la ley para hacer referencia directa a la nueva provincia, no queda claro qué partes de las provincias de Nor y Sud Yungas deberían ser consideradas 'áreas de colonización' y cuales 'áreas de producción minifundaria actual'. A fines de la década de los 1980s, el proyecto de sustitución de coca 'Agroyungas' consideraba que la zona de producción tradicional se extendía hasta el pueblo de Tagma en Sud Yungas, pero realizaba actividades de sustitución de cultivos tanto dentro como fuera de la zona tradicional. Fue sucedido por el programa de erradicación voluntaria con compensación monetaria dirigida por DIRECO, que también funcionaba en ambas zonas y, por lo tanto, no estableció una definición tajante de los límites de una y otra, aunque luego se declaró que no deberían haber realizado erradicación en la 'zona tradicional'.

Después hubo un cuarto intermedio respecto a la erradicación en los Yungas, aunque los pobladores, sobre todo de La Asunta (quinta sección de Sud Yungas), consideraban que habían sido clasificados definitivamente como parte de la zona excedentaria y, en consecuencia, estar sujetos a la erradicación en cualquier momento. Es importante notar esto porque significa que, desde principios de los 1990, la generalidad de la población pensaba en la posibilidad de la entrada de fuerzas militares dedicadas a la erradicación de cocales e iba preparando, aunque sólo sea en el pensamiento, estrategias de resistencia para esa contingencia. Una opinión difundida era que *'en el Chapare han erradicado porque es plano, pero aquí no van a poder entrar porque hay cerros'*. Como se verá, esta opinión sobre el valor militar del terreno resultó ser cierta. Pero el gobierno de Hugo Banzer, después de asumir el poder en 1997, concentró sus esfuerzos en el Chapare, con el intento de imponer 'coca cero' allí. Aunque la

embajada estadounidense destacó la existencia de cultivos excedentarios de coca en los Yungas y publicó el nombre de la zona de La Asunta (cuya existencia y status legal dudoso, al parecer, hasta esas fechas era sólo de conocimiento yungueño) el gobierno no hizo más que expresar intenciones generales de erradicar coca en los Yungas y mencionar el tema en unas negociaciones inconclusas con los dirigentes coccaleros. Este panorama de inactividad tras una pantalla de 'guerra de posiciones', donde ambos bandos se limitaron a expresar sus posturas sin tomar actos decisivos, cambió definitivamente a partir del 13 de junio de 2001.

El relato que sigue es sólo preliminar.²⁵ Falta realizar una recopilación más amplia de testimonios procedentes de los lugares donde ocurrieron los hechos, que, es de notar, han sido reportados de manera muy pobre y superficial en los medios de comunicación nacional, sobre todo en la prensa escrita. Sólo la radio ERBOL proporcionó una información algo más amplia, debido a su vínculo con la emisora local, Radio Yungas, con sede en Chulumani. Esta última fue amenazada con un juicio por subversión por parte del Ministro de Gobierno, Guillermo Fortún, por haber cumplido con su trabajo de diseminar información sobre los hechos. De todos modos, considero que es importante consignar una versión de los eventos que intenta abarcarlos de manera general, aunque quedan varios interrogantes y lagunas por resolver.

Según la información que se ha podido recoger, la tropa de la Fuerza de Tarea Conjunta ingresó a Sud Yungas en la madrugada de miércoles 13 de junio. Una parte se dirigió al pueblo de Chulumani, llegando cuando era todavía de noche, acuartelándose sus integrantes en la granja militar 'Mejillones', más arriba del pueblo; estos se quedaron allí y no tomaron parte activa en los acontecimientos posteriores. Se hizo llegar una cantidad de material – carpas, colchones, frazadas, ollas, platos, víveres, herramientas, etc.– para el uso de los erradicadores, que fue almacenado en el Hotel Huayrani, a la entrada del pueblo de Chulumani. La otra parte de la FTC se dirigió hasta el sector Asunta. Parece que algunos entraron de noche, en caimanes, pero la mayor parte de la tropa entró ya de día en flotas civiles, contratadas, portando letreros de la UMSA. Este hecho fue ignorado por los medios y hasta por la propia universidad. Valiéndose de este ardid, la tropa llegó hasta un sitio a poca distancia del pueblo de la Asunta sin que la población la identificara como militares. Sólo cuando los pasajeros de la primera flota, al parecer carentes de un oficial que les mande, salieron a pasear con dirección al pueblo y descansaron en el camino, se vio que eran soldados. Asimismo, parece que el Alcalde (adenista) había sido informado con anticipación de su llegada porque

25 Se basa principalmente en el documento Huanca (s.f.), que cubre exclusivamente el espacio entre Asunta y Villa Barrientos, sin incluir a Chulumani, así como en testimonios verbales procedentes de Esteban Aguilar (policía destinado a la comisaría de Asunta en ese entonces) y de algunos comunarios de la comunidad originaria de Cuchumpaya. Respecto a las negociaciones con los ministros, se ha utilizado un video de las mismas filmado por David Quispe y Silvia Rivera.

se dice que él dio la orden de desbrozar el lugar donde se iba a establecer el campamento militar. Se trata de un terreno perteneciente a la Prefectura de La Paz, a un kilómetro y medio del pueblo de Asunta, conocido como 'el vivero del Evenay', por el río donde se encuentra y fue desbrozado por los alumnos de los últimos cursos del colegio fiscal, quienes fueron inducidos a realizar el trabajo a cambio de 60 puntos en cuatro materias, los días 17 y 18 de mayo.

El destacamento, mayormente de jóvenes conscriptos de la Armada, llegó allí la tarde del miércoles 13, entre las 16:30 y las 18:00 horas, en dos flotas civiles. Esa misma tarde, el Alcalde hizo cortar el suministro de energía eléctrica al pueblo de Asunta, supuestamente porque había que hacer algunos arreglos técnicos. Parece que su fin era impedir que la población recibiese información por radio o televisión, excepto en el caso de manejar radios con pilas, como es el caso entre los habitantes rurales que llevan sus radios al trabajo o no tienen luz en sus casas. Esto ya provocó susceptibilidad, la que se agravó cuando llegaron dos carros cisternas llenos de combustible y otros dos cargados de herramientas como picotas y lampas (para la erradicación) víveres y material para el campamento. Sus choferes, que no eran militares sino gente contratada por una agencia, no sabían la ubicación exacta de éste y preguntaron a la gente: '*¿Dónde están los universitarios que han llegado?*'. La gente, a su vez, se preguntaba '*¿Por qué unos universitarios van a necesitar un cisterna entera de combustible y herramientas?*' y allí se dio cuenta de la verdadera naturaleza del campamento. Estas cuatro movi­dades se quedaron a dormir en las calles del pueblo y salieron rumbo al vivero sólo en la madrugada del día 14.

Los dirigentes locales, de FEUTCA (Federación Especial Única de Trabajadores Campesinos – La Asunta), ADEPCOCA y de una de las juntas de vecinos del pueblo, obtuvieron un altoparlante con motor y llamaron a una reunión de emergencia 'porque los *umopares* ya estaban', pero pocas personas salieron. Recorrieron las calles del pueblo, tocando puertas, arrojando piedras a los techos y reventando petardos hasta que a las 22:00 horas se reunió una muchedumbre en la entrada del pueblo. Se montó una vigilia allí, en la avenida principal por donde pasa la carretera y varias personas se desplazaron en motocicleta a las comunidades y los núcleos urbanos de Pijchari y Cotapata para comunicar la situación, yendo de casa en casa. También se llamó por teléfono a Radio Yungas, que diseminó la noticia de la llegada de la tropa. Se convenció a los funcionarios del proyecto agroforestal FAO de que presten su vagoneta para ser usada con el mismo fin. Algunos jóvenes que escucharon el mensaje en la radio fueron por su cuenta al sitio llamado Balconcillo a bloquear la carretera con rocas y preparar cargas de dinamita; cuando cerca de la medianoche se encontraron con otras movi­dades militares de entrada, lanzaron un dinamitazo y se retiraron, dejando más piedras en el lugar para dificultar el avance de los militares. Estos llegaron hasta el Centro Mayachasita (un terreno comprado por el fracasado proyecto de sustitución de coca 'Agroyungas' en los años 80) donde fueron detenidos por los campesinos del lugar, que estaban quemando llantas y

palos. Después de un diálogo pacífico, este grupo de 6 movilidades acordó retirarse sin haber llegado al pueblo.

Por la madrugada (04:00) del día jueves, ya había una gran concentración de gente en Asunta. Según una versión, se buscó a las autoridades, pero el Alcalde y los concejales se habían fugado u ocultado y sólo encontraron a uno de ellos, un concejal de UCS (ex-condepista). Le pegaron, lo amarraron con sogas y lo arrastraron en medio de una multitud hasta el campamento. Otras fuentes no mencionan esto, pero es cierto que a las 06:30 horas entre 400 y 500 personas, armadas de palos, flechas y otras armas improvisadas, se dirigieron al vivero en los camiones que encontraron y a los que poco menos obligaron a llevarles. Allí se les unieron grupos de campesinos de las comunidades con pututus, wiphalas, machetes, palos y piedras. La gente rodeó al campamento. Según algunos, obligaron al concejal a hacer de portavoz frente a los oficiales militares, diciéndoles que tenían que abandonar la región de inmediato, caso contrario iba a haber un enfrentamiento. Según otros, hubo un debate desordenado, sin portavoces o líderes particulares, donde todo el mundo, sobre todo las mujeres, gritaba, amenazaba e insultaba a los soldados y hasta les arrojaron con naranjas. Esto ocurrió aproximadamente a las ocho de la mañana del jueves 14 de junio. Al parecer, los oficiales se asustaron, más aún la tropa, viéndose rodeada por una masa de campesinos que la amenazaba con no salir con vida de allí; se habla incluso de un amotinamiento de la tropa que insistió en irse. Primero, pidieron un plazo hasta las 16:30, luego hasta las 12:00, pero los campesinos insistieron en una salida en 20 minutos. De todos modos, el destacamento en su totalidad salió del campamento: primero las cuatro movilidades mencionadas, escoltadas por las movilidades de los campesinos, y luego los 70 soldados a pie. Parece que fue durante esta marcha que les quitaron sus fusiles a unos dos reclutas. Estos rompieron a llorar y los campesinos, conociendo los castigos que esperan en el cuartel a cualquier recluta que pierda su arma, no importa el motivo, se las devolvieron, pero no dejaron parar la marcha. Llegaron a la tranca en el pueblo a las 09:30, donde los campesinos les obligaron a seguir hacia La Paz. Partieron todos subidos como sea en sus movilidades y los campesinos les siguieron en sus vehículos.

Alrededor de las 11:00, llegaron al sector Chamaca. Allí había llegado el tercer componente de la Fuerza de Tarea Conjunta, un destacamento de los 'Leopardos' (Unidad Móvil de Patrullaje Rural o UMOPAR), que era el mismo que había sido expulsado del Centro Mayachasita en la madrugada. UMOPAR es una fuerza policial militarizada, cuyos integrantes son mayores y más profesionales que los jóvenes conscriptos, que ha estado presente y se ha encargado de la represión al narcotráfico en los Yungas desde 1987. Operan los controles en la tranca de Unduavi y tienen su cuartel en el pueblo de Irupana, a la salida hacia la provincia Inquisivi. Son considerados abusivos (regularmente decomisan combustible y cualquier objeto de valor que encuentran en sus requisas) y se les teme. Probablemente por este motivo la gente de Chamaca hasta ese momento no había hecho nada frente a su presencia. Cuando llegaron los soldados a la cancha deportiva que hay en el Cruce, se aparcaron junto con las

otras movilidades militares y, dado que habían caminado en el calor sin comer ni tomar nada, quisieron descansar allí y preparar comida. La gente en masa –los que vinieron de Asunta y otros que se habían unido a ellos por el camino- se opuso. Fue aquí donde hubo un enfrentamiento, cuyos detalles faltan aclarar, que terminó en una huida de los militares. Varios de los vehículos de estos chocaron al intentar salir apresuradamente, uno de sus choferes huyó desfavorido perdiéndose en la maleza y los campesinos lograron saquear en su totalidad un camión que llevaba herramientas para la erradicación, apoderándose de las cajas de picotas y demás objetos que traía. La gente siguió a los militares hasta la playa de Totorá, donde se encontraba reunido el grueso del contingente militar (procedente del Evenay y de Mayachasita). Estos lograron detener al primer camión campesino en llegar, uno de Chamaca que se había adelantado a los demás (14:00 horas) y golpearon a su chofer, mientras los pasajeros se atrincheraron en el camino y empezaron a quemar el pasto seco y lanzar piedras. Allí se produjo otro enfrentamiento más violento, con uso de gases lacrimógenos e incluso balas por parte de la FTC, a causa de lo cual unos tres campesinos (dos hombres y una mujer) fueron heridos. A las 15:00 horas llegaron al lugar las primeras movilidades de La Paz, que dijeron haber pasado en el camino a otros 10 o 15 camiones del gobierno con equipos para la erradicación. Las movilidades civiles, cuyos pasajeros también eran coccaleros, ocuparon entonces la carretera dejando a los militares sin salida hacia La Paz. También se escuchaban dinamitazos desde más adentro, en el frente del Río Boopi y luego arriba del camino. Los militares se dieron cuenta de que estaban cercados, pararon el enfrentamiento y liberaron al chofer detenido. Dialogaron con los dirigentes locales y acordaron retirarse hasta Villa Barrientos. Los coccaleros de La Asunta los dejaron allí, después de haber obtenido un compromiso de desocupar el sector y volver a Chulumani (21:30 horas). Hasta allí todos los militares fueron trasladados en motorizados, pero al parecer fue en Villa Barrientos que los conscriptos fueron descargados y tuvieron que continuar el viaje a pie, mientras los oficiales se fueron en las movilidades. Aparentemente este contingente, en su totalidad o en parte, se desvió hacia Irupana y se refugió en el cuartel de UMOPAR en Churiaca.

Villa Barrientos se encuentra donde el río de Tamampaya se une con el de Solacama. Desde allí hasta Asunta, la carretera corre por encima del río, al lado de unos barrancos arriba de los cuales viven las comunidades pero son invisibles desde el camino mismo. A partir del puente sobre el Tamampaya empieza una larga y penosa subida, por donde seguramente transitaron los reclutas. Pasada la medianoche, llegaron al pueblo de Tagma y quisieron descansar en su cancha, pero los habitantes tampoco los dejaron. Lo mismo pasó alrededor de las 04:00 en Chimasi, la comunidad que ocupa el cruce, donde el camino troncal desde La Paz se divide entre la carretera que va a Asunta y la que va a Irupana e Inquisivi. Durante la noche entera, el ruido de campanas y pututus y la hostilidad de los campesinos los obligó a seguir la marcha; se dice que en Pastopata (pasando Tagma) les arrojaron con cajones de abeja para que les piquen. Ya cerca al amanecer, pasaron por las comunidades aledañas al pueblo y debieron

cruzarse con los colegiales subiendo al pueblo, donde llegaron aproximadamente a las 07:00 de la mañana del viernes 15 de junio.

La tropa quiso subir a la granja de Mejillones, pero los alumnos del colegio, las comerciantes y vecinos del pueblo en general no les permitieron pasar. Fue en este momento que el Subprefecto de Sud Yungas dio órdenes a la policía de gasificar a 'estos indios'. Este Subprefecto, adenista, es un ex-militar oriundo de Chirca, un pueblo colonial decaído desde que, en los años 1930, quedó fuera de la carretera actual. Representa a la elite vecinal decaída y su posición frente a la manifestación campesina enfureció a la gente. A la vez que se desarrolló un enfrentamiento fuerte, con gasificaciones masivas en las calles del pueblo, que culminó en la retirada de los soldados que fueron nuevamente arreados en dirección a La Paz, otra gente persiguió al Subprefecto, obligándolo a fugar a pie cerro arriba, en compañía de unos cuantos colaboradores cercanos, tomando el antiguo camino de herradura de Yunga Cruz hasta Lambate (la parte de altura de Sud Yungas), donde llegó dos días después. Para entonces, la noticia del enfrentamiento en Las Mercedes ya había llegado a los medios en La Paz y se presentaron canales de televisión, que difundieron escenas de colegialas gasificadas y el enfrentamiento en las calles. Los campesinos identificaron a los oficiales que comandaban la Fuerza de Tarea Conjunta, dos hermanos procedentes de Lasa, otro pueblo colonial de Sud Yungas. El mayor de ellos fue golpeado por la gente y la masa entró luego a saquear el Hotel Huayrani, apoderándose de todo el material allí almacenado. Mientras tanto, los soldados, agotados y muchos de ellos llorando, seguían caminado hacia Puente Villa. Estaban tan desesperados por la sed que algunos tomaron las aguas estancadas de los charcos de la cuneta. Los campesinos decían '*Guaguas son, son como nuestros hijos*' –es decir, son jóvenes campesinos oriundos de otras regiones del país– y querían darles al menos agua y unos plátanos, pero acataron la decisión general de no darles respiro hasta que salieran de la provincia. Por la tarde del viernes llegaron a Puente Villa, donde su 'escolta' campesina se quedó estableciendo una vigilia, mientras la tropa pasó el puente y de allí, al parecer, fue recogida en movi- lidades para ir hasta Unduavi y luego a La Paz. La vigilia era para impedir la entrada de otras movi- lidades militares y también la salida de coca hacia la ciudad, donde los dirigentes de ADEPCOCA (Asociación Departamental de Productores de Coca) habían echado llave al Mercado Legal de la Coca en Villa Fátima, argumentando que no era justo que algunos estén 'felices vendiendo su coca' mientras otros resistían a la militarización.

Entonces se estableció una especie de cuarto intermedio. Se denunció el saqueo del Hotel Huayrani y se pidió a la gente devolver los materiales, lo que se hizo casi en su totalidad (para recibir los bienes se presentó el segundo de los oficiales al mando de la FTC, hermano menor del primero, aunque vestido de civil; él había logrado ocultarse cuando la gente estaba golpeando al otro oficial). La tropa acuartelada siguió allí sin salir y se anunció la apertura de negociaciones con el gobierno. Se mantuvo la vigilia en Puente Villa, obligando a todo vehí- culo (flota, camión o particular) a parar y dar cuenta de sus pasajeros y carga; sólo después de

un ampliado de los vigilantes se les daba permiso para seguir viaje. En Asunta, donde el viernes es día de feria, se suspendió tanto la actividad comercial y artesanal (carpinterías, cerrajerías, etc.) como las clases en las escuelas y los colegios y no se permitió la salida de ninguna movilidad, aparte de las destinadas para ir a bloquear el camino en el sector de Chulumani. Todas las demás, con destino a La Paz o adentro (Pijchari y Cotapata) fueron obligadas a permanecer en el pueblo. Este estado de emergencia, impuesto por una reunión de emergencia de los campesinos, se mantuvo hasta el lunes 18 de junio, cuando la gente se convenció de que otra arremetida militar no era inminente. En el pueblo de Chulumani, se permitió el paso de movilidades en tránsito hacia otros lugares, pero ninguna pudo entrar al pueblo mismo y sus pasajeros tuvieron que bajar en la tranca y entrar a pie. De todos modos, el flujo vehicular fue muy reducido esos días porque muchos no salieron de La Paz para no tener que enfrentar la vigilia en Puente Villa, tampoco salieron del sector de Adentro y se detuvo el comercio de coca, que es el flujo comercial que motiva la mayor parte de los viajes. Varias Federaciones de la provincia realizaron ampliados para determinar la posición que iban a adoptar frente al gobierno y ‘ensayar’ sus discursos.

A la vez, llegaron a Chulumani Dionisio Nuñez y otros dirigentes de la COFECAY (Consejo de las Federaciones de Yungas), quienes habían estado en un ampliado en La Paz. Esta organización reúne a las Federaciones de Nor y Sud Yungas, Asunta, Irupana y Chamaca, pero estaba dividida porque mientras la mayoría se inclinó hacia el partido MAS de Evo Morales, las Federaciones de Chulumani y Chamaca simpatizaron con Felipe Quispe y firmaron aparte un convenio con el gobierno asintiendo a la erradicación individual por un pago de Bs. 16.000 por hectárea. Puede ser que esta aparente división alentara al gobierno a empezar con la erradicación, suponiendo que las bases iban a estar igualmente divididas, aunque la reacción unánime de la gente de toda la provincia, desde Asunta hasta Puente Villa, demuestra que la división no era más que una querrela a nivel dirigencial y que las bases estaban totalmente decididas a resistir la erradicación de todos modos. Aunque estos dirigentes figuraron como representantes titulares durante el diálogo con el gobierno, eran sólo portavoces de las decisiones tomadas en ampliados de base por parte de cada federación constituyente. El hecho de que ninguno de ellos apareciera como protagonista en los reportajes mediáticos en este caso se debe a que la movilización fue un verdadero movimiento de bases, no se trata de cierta decisión de los medios, fomentada por los intereses oficialistas, de no dar más espacio a otros líderes campesinos para que no lleguen a tener el perfil público de Felipe Quispe (recuérdese que los sectores más reaccionarios suelen culpar a los medios por haber elevado a este último a la posición de figura nacional). También tiene que ver con el rechazo al caudillismo de, por ejemplo, Alejo Veliz, expresado en el pasado por las organizaciones yunqueñas.

La comisión del gobierno fue encabezada por tres ministros: Guillermo Fortún (Gobierno), Hugo Carvajal (Agricultura) y el de Defensa (Oscar Vargas, que no dijo palabra durante las reuniones, al menos como para hacerse escuchar por el público). Llegaron a Chulumani en

la mañana del martes 19 de junio. Una concentración masiva de gente (los periódicos mencionan cifras que varían entre seis y ocho mil pobladores) a la entrada del pueblo los obligó a bajar de sus vehículos (cuya salida luego fue bloqueada por un camión) y caminar a pie, en medio de la muchedumbre, por todo el pueblo hasta llegar a la cancha en el otro extremo del espacio urbano. Los campesinos entraron en grupos, según sus federaciones (la de Sud Yungas, que en realidad sólo incluye a Chulumani y Yanacachi, la de Irupana ¡encabezada por su Alcalde adenista!, la de Chamaca y la de Asunta), distribuidos dentro de ellas según Subcentrales y sindicatos de base, y munidos de wiphalas y pututus.²⁶ Los ministros se sentaron en una tribuna cubierta por un toldo, que luego fue retirado a pedido de la gente, que insistía en que los dignatarios debían sufrir bajo el sol calcinante igual que ellos. Las negociaciones empezaron con una ronda de declaraciones por parte de los dirigentes que representaban a cada una de las federaciones. Todos expresaron su rechazo a la erradicación y exigieron la retirada inmediata de los militares que se encontraban en el cuartel de Mejillones. El ministro Fortún respondió, como era de esperar dada su fama de hombre de mano dura, que la tropa no iba a salir y que se iba a proceder con la erradicación, pero al escuchar una segunda ronda de réplicas de las bases, en la que todos se mostraron igualmente firmes en contra de la erradicación y la militarización, sorprendentemente se rindió y anunció que la tropa iba a retirarse. Sólo pidió que los transportistas de la zona proporcionen movilidades, que serían pagadas por el gobierno, para llevarla. Hubo una respuesta inmediata por parte de los transportistas y cinco buses y 10 camiones subieron a 'la Granja' (que es como se conoce al cuartel, debido a que tiene instalaciones de formación en agropecuaria), mientras se acordó un cuarto intermedio hasta constatar la salida de la tropa.

Esto duró casi hasta el atardecer, debido a que el camino a la Granja es muy estrecho y la cantidad de movilidades efectivamente lo bloqueó, necesitándose muchas maniobras para permitir la salida. La base campesina se trasladó a la plaza principal e instaló una vigilia allí, que continuó hasta altas horas de la noche. Una vez partieron los soldados, ministros y dirigentes se trasladaron a la Alcaldía para seguir discutiendo el convenio que fue firmado más tarde esa noche. Por la tarde, el ministro Carvajal propuso una inversión de 43 millones de dólares en 'desarrollo alternativo' a cambio de la erradicación voluntaria, lo que fue rechazado de manera tajante por los cocaleros. 'Agroyungas' y otros proyectos pasaron por ofertas de 'desarrollo alternativo' que nunca representaron una alternativa real a la coca y, en el caso del café caturra, una variedad mejorada de café promocionada por Agroyungas, incluso arruinaron la producción de café existente, ya que se considera que fueron las semillas de ese café,

26 Por lo general, no llevaban carteles identificándoles. Sólo se observó uno que rezó 'Huancapampa presente', ubicado frente al tribunal ministerial. Huancapampa es una ex-hacienda que se ubica en el cantón Chirca pero desde la perspectiva informal forma parte del 'sector Huancané', notorio en la región por sus tendencias violentas y gusto por los linchamientos. Parece que el cartel y su posición era una especie de amenaza velada: '*Si hay que llegar a las manos ¡aquí estamos nosotros!*'.

carentes de un control fitosanitario adecuado, las que trajeron la broca, una plaga que desde fines de los 1980 ha infestado todos los cafetales, criollos o no, de los Yungas. En vez de desarrollo alternativo, exigieron reformas al reglamento de comercialización de la coca, con fines de liberalizarlo. El convenio fue firmado poco después de las 23:00 y el gobierno se comprometió a no erradicar la coca de Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi, a retirar los efectivos militares y curar los heridos en los enfrentamientos, así como a negociar un nuevo reglamento de comercialización a partir del 21 de junio. No es casual que quince días después se denunciara la existencia de 700 licencias ‘truchas’ de comercialización de coca emitidas por la Dirección General de Control y Fiscalización de la Hoja de Coca (DIGECO) a partir de 1997. Aunque de hecho esto sólo demuestra que hay funcionarios de DIGECO que están a la venta, como en toda repartición estatal boliviana, ello fue interpretado –sin prueba empírica alguna– como una demostración de que ‘el narco controlaba’ la emisión de licencias y que toda la coca correspondiente a esos permisos iba automáticamente a ser procesada para cocaína (ver semanario ‘Pulso’ junio 29-julio 5, 2001). Pero el tema de la comercialización de la coca queda fuera del alcance de este ensayo, cuyo fin es comentar sobre los usos del espacio y las formas de organización y liderazgo que se observa en los conflictos sociales.

En primer lugar, la movilización yungueña fue definitivamente una demostración del ‘poder demótico’ y de un movimiento acéfalo y espontáneo, aunque espontáneo no quiere decir ‘sin planes, caótico’. Esto no sólo se debe a la ausencia coyuntural de la cúpula dirigenal y tampoco representa su reemplazo por ‘cuadros de base’ u otro grupo organizado. Todas las referencias obtenidas sobre los hechos indican que fue una movilización en masa, tipo hormiga y virtualmente universal. Desde hace más de una década, los cocaleros de los Yungas estaban esperando la llegada de ‘la repre’. Durante mi primer trabajo de campo en la zona (1986-88) ya se hablaba de cómo se haría sonar los pututus –que jamás se utilizan en la vida cotidiana, pues han sido reemplazados por campanas para señalar reuniones sindicales, defunciones y similares– para anunciar la movilización general. Es decir, esto ya era de conocimiento general y todo el mundo ya tenía pensados los lugares por donde saldrían y donde sería necesario controlar o bloquear las rutas. La salida de la tropa desde Asunta, sobre todo la caminata forzada desde Villa Barrientos hasta Puente Villa, presenta una impactante inversión del esquema de la marcha de protesta –esta vez no son los de abajo, los demandantes, los que marchan sino los representantes del poder del Estado quienes han sido forzados a realizar la marcha, como señal de sumisión a las exigencias populares y de que son ellos los que ahora asumen la posición que representa la súplica ante las autoridades.²⁷ En este caso, la posibilidad de un bloqueo, una posición más de confrontación y demanda que la marcha, que podía

27 Al menos, según la posición de los dirigentes de la Coordinadora del Agua en abril de 2000, quienes rechazaron una marcha y huelga de hambre a favor de la movilización con bloqueo, argumentando ‘*que estos medios corresponden a momentos de reflujos organizativo...lo que buscan es sólo la sensibilización de los gobernantes*’ (Gutiérrez, García y Tapia 2000:152).

ser impuesto en cualquier momento al masificar la vigilia en Puente Villa, quedó en un lugar secundario y, debido al colapso de la resistencia gubernamental,²⁸ no fue necesario imponerlo; pero es notable que en este caso el lugar propuesto era también uno que generalmente representa al poder estatal y la posibilidad de tomar la ofensiva, es decir, un cruce mayor donde suele haber trancas y no un sitio defensivo en medio de un trecho de carretera sin ramales.

En lo relativo a la percepción gubernamental del espacio, aquí parece haber habido un desconocimiento total de las condiciones específicas en La Asunta. Mientras el Chapare es una región de serranías bajas, de traslado relativamente fácil y que posee varias carreteras de entrada, aquí hay una sola carretera que entra a Asunta. Después de pasar por Chulumani, atraviesa las poblaciones de Villa Remedios, Pastopata y Tagma, antes de entrar en una larga bajada por pendientes abruptas y llegar al lugar donde el río de Tamampaya se junta con el de Solacama. Desde allí pasa entre el río (que luego se junta con el río de La Paz para formar el caudaloso y barroso Boopi) y el barranco, con múltiples entradas y salidas. Hay algunas casas al lado del camino pero la mayoría quedan encima, invisibles desde el camino y tampoco se puede ver lo que está a la vuelta de las muchas curvas. Dado que el lado del barranco estaba ocupado por los campesinos, si no salían por el camino la única alternativa para los soldados era echarse al río, es decir, la ruta es un verdadero callejón oscuro. La tropa y sus oficiales se había dado cuenta de esto al entrar y, por lo tanto, sabían que las amenazas de los campesinos de no dejarles salir con vida si había un solo muerto, no eran vanas. La única manera de transitar tal camino frente a la oposición de la población sería con apoyo aéreo (helicópteros

28 Que parece haber sorprendido a todos y no permitió que dirigentes campesinos a nivel nacional saquen provecho de los acontecimientos. En mi parecer, en esto Felipe Quispe falló por falta de oportunismo (y, quizás, confianza excesiva en su convocatoria personal). Mantuvo su declaración de iniciar un bloqueo nacional recién el 21 de junio, destacando que esto representa el 'Año Nuevo Aymara' (¿malos consejos de los asesores amawt'as que dice tener respecto al valor ritual de ciertas fechas?, ¿era de aferrarse más bien a la muy católica fiesta de Corpus Christi, que en 2001 cayó el 14 de junio?). En tanto se informó sobre la presencia de militares en los Yungas, noticia que salió recién a los medios el día 14 y se generalizó el día 15, debería haber llamado inmediatamente al bloqueo nacional. En tanto hubiese habido respuesta, se hubiera sumado a la protesta cocalera y aunque esto se resolviera rápidamente, 'de por sí', como eventualmente resultó, hubiera podido atribuirse parte del éxito a la protesta campesina nacional. Sospecho que Quispe y compañía pensaron que las negociaciones en Chulumani iban a empantanarse, como había pasado tantas veces en el Chapare, que los yungueños pasarían al bloqueo y entonces se sumarían los del Altiplano... pero la capitulación de Fortún (se dice, con el aval personal del Presidente Bánzer) dejó el bloqueo de las posteriores semanas de junio sin relevancia alguna en los Yungas y, dado que no había demandas tajantes ni claras que podían motivar a otros sectores, se quedó como una manifestación meramente regional, limitada a la zona lacustre del Altiplano Norte. Es posible que una de las razones que motivara el gobierno a la rendición era solucionar al menos un problema apremiante antes del inicio del sonado bloqueo, lo que era una manera de serruchar el piso a Quispe. Yo no pienso, sin embargo, que lograron un nivel de razonamiento así de maquiavélico, sino que se dieron cuenta de que la entrada a Yungas había sido una metida de pata totalmente mal planificada y que era mejor retirarse antes de caer en peores problemas allí. Cualquiera que haya observado al gobierno de Bánzer a partir de 1997 estará de acuerdo en que es la improvisación y no el manipuleo astuto lo que caracteriza sus actuaciones en cualquier nivel.

que acompañen la marcha desde arriba, etc.) y no lo tenían; en las semanas anteriores, algunos helicópteros sobrevolaron el pueblo de La Asunta y se dice que hasta aterrizaron en las playas del Boopi, pero no estuvieron presentes cuando entró la FTC. El ministro Carvajal había visitado el pueblo de Asunta meses antes para proponer el mencionado acuerdo sobre la erradicación pero parece que no tomó en consideración las condiciones estratégicas de la entrada o, si alguien las comentó, fueron descartadas por las instancias superiores que tomaron la decisión de mandar la tropa.

El territorio de los Yungas en general, por ser muy accidentado, con pocas rutas aptas para el tránsito vehicular y mayormente cubierto de un monte que, aunque no es el monte alto de la selva, resulta perfectamente adecuado para ocultar el paso de personas caminando a pie por los 'deshechos' (caminos peatonales), es ideal para una guerra de guerrillas. La misma opinión ya me fue expresada por unos cocaleros del sector Asunta en 1996, otra señal que las bases han preparado sus tácticas de resistencia con bastante anticipación. Esto no quiere decir que el Estado jamás podrá reprimir la resistencia campesina, pero significa que esto sería muy costoso en términos de efectivos, equipamientos y muertes (de ambos bandos, aunque por supuesto más del lado campesino) y un gobierno tan débil, deslegitimado y sin proyectos coherentes como el actual difícilmente lo podría asumir.

Bibliografía

BOURDIEU Pierre

1984 *Homo Academicus*. Minuit, París.

DEGREGORI Carlos Iván (comp.)

1994 *Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso*. IEP/UNSCHE, Lima.

DUNKERLEY James

1984 *Rebellion in the veins. Political struggle in Bolivia 1952-1982*. Verso, Londres.

GARCÍA Alvaro, Raquel GUTIÉRREZ y Luis TAPIA

2000 "La forma multitud de la política de las necesidades vitales" En: García, Gutiérrez, Prada y Tapia, *El retorno de la Bolivia plebeya*. Comuna, La Paz.

GOSE Peter

1994 *Deathly waters and hungry mountains. Agrarian ritual and class formation in an Andean town*. Toronto, Buffalo, Londres: University of Toronto Press. [Traduc-

ción castellana: *Aguas mortíferas y cerros hambrientos. Rito agrario y formación de clases en un pueblo andino*. Editorial Mama Huaco, La Paz, 2001]

HARRIS Olivia

1980 "The power of signs: gender, culture and the wild in the Bolivian Andes" En: C. MacCormack y M. Strathern (comps.) *Nature, culture and gender*. Cambridge University Press, Cambridge.

HUANCA Bernardo

s.f. *Cronología de un hecho social. La expulsión de la Fuerza de Tarea Conjunta del Vivero de Evenay, Chamaca y Totora por los campesinos de La Asunta*. Manuscrito.

LASERNA Roberto (coord.), Natalia CAMACHO y Eduardo CORDOVA

1999 *Empujando la concertación. Marchas campesinas, opinión pública y coca*. PIEB, La Paz.

LLANOS David y Alison SPEDDING

1999 *No hay ley para la cosecha. Un estudio comparativo del sistema productivo y las relaciones sociales en Chari (Provincia Bautista Saavedra) y Chulumani (Provincia Sud Yungas)*. PIEB, La Paz.

RUDE Georges

1971 *La multitud en la historia. Los disturbios populares en Francia e Inglaterra, 1730-1848*. Siglo XXI, Madrid.

SANABRIA Harry

1994 *The coca boom and rural social change in Bolivia*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

SPEDDING Alison

1994 *Wachu wachu. Cultivo de coca e identidad en los yungas de La Paz*. CIPCA/COYAYAPU/HISBOL, La Paz.

1996a *Morir en Yungas*. Revista del Museo de Etnología y Folklore 7/8, La Paz.

1996b "Espacio, tiempo y lenguaje en los Yungas" En: García, Gutiérrez, Iturri, Prada et al., *Armas de la utopía. Marxismo: provocaciones heréticas*. CIDES, La Paz.

SPEDDING Alison y Abraham COLQUE

Chulumani flor de clavel. Poder local en los Yungas de La Paz (en preparación)

SUÁREZ Hugo José

1996 “Apuntes sobre la lectura marxista de la religión en América Latina” En: García, Gutiérrez, Iturri, Prada, et al., op.cit.

TOCANCIPA FALLA Jairo

1997 *Coca, campesinos y proyectos de desarrollo alternativo en Colombia*. Ponencia presentada en el simposio ‘Construcción de sociedades y re-creación cultural en contextos de modernización’, 49o Congreso de Americanistas, Quito.

TICONA Esteban, Xavier ALBÓ y Gonzalo ROJAS

1995 *Votos y wiphalas*. Fundacion Milenio, La Paz.

URIOSTE FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA Miguel

2000 *Una visión general sobre las tierras bajas en Bolivia*. Revista T'inkazos 7, La Paz.